

INE/CG1251/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA SUR” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO POLÍTICO DEL TRABAJO Y EL C. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN SU CARÁCTER DE PRECANDIDATO A GOBERNATURA DE DICHA COALICIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

México, Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS** integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización en cuanto al origen y aplicación de los recursos del financiamiento de los partidos políticos.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja presentado por la C. Jesús Armida Castro Guzmán en su carácter de candidata del Partido Verde Ecologista de México. El seis de mayo del dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/BCS/JLE/VS/0665/2021 signado por el Mtro. Juan Pablo Figueroa García, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California Sur, por medio del cual remite escrito de queja presentado por la C. Jesús Armida Castro Guzmán en su carácter de candidata a la gubernatura del estado de Baja California Sur por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California Sur” integrada por los partidos Morena y del Trabajo, así como de su presunto precandidato a la Gubernatura de Baja California Sur, el C. Víctor Manuel Castro Cosío, respecto hechos que a su consideración podrían constituir violaciones a la normativa electoral en materia de fiscalización, para que dentro del ámbito de competencia de esta autoridad, se determine lo que en Derecho proceda. (Fojas 01-10 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos denunciados por el quejoso en su escrito de queja, así como las pruebas aportadas:

“(…)

HECHOS:

1. El 01 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, declaró el inicio del proceso local electoral 2020-2021, mediante el que, entre otros cargos de elección popular, se elegirá al presidente municipal de Los Cabos.

2. El 23 de diciembre de 2020, dio inicio la etapa de precampañas, la cual concluyó el día 31 de enero de 2021.

3. El 31 de diciembre de 2020, la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante sesión extraordinaria, aprobó la solicitud de registro de convenio de coalición total, presentada por los partidos políticos Morena y del Trabajo, para el Proceso Electoral 2020-2021, a celebrarse en el Estado, como se desprende del Dictamen número IEEBCS-CPRP-DC-0010-2020.

4. El 1 de febrero de 2021, dio inicio la etapa de intercampaigna, la cual concluyó el día 3 de abril de 2021.

5. El 26 de marzo de 2021, la suscrita presentó escrito de denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Baja California Sur, respecto de conductas atribuidas a Victor Manuel Castro Cosía, susceptibles de constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de actos anticipados de campaña y de precampaña.

*6. El 15 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur (en adelante "TEEBCS"), resolvió el procedimiento especial sancionador TEEBCSPES-014/2021, referido en el numeral inmediato anterior, en el sentido de declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas, así como de **reconocer el carácter de C. Víctor Manuel Castro Cosío como precandidato a la gubernatura***

del Estado de Baja California Sur por parte de la Coalición Junto Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena y Partido del Trabajo. Para mejor referencia, se transcribe la parte relevante de la sentencia;

*En esas condiciones, es inconcuso que se acredita el elemento personal, Puesto que Víctor Manuel Castro Cosío es plenamente identificable como Coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, esto es, **como precandidato de Morena para la Gubernatura del Estado.***

Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por la denunciante en su escrito de queja, mismos que fueron precisados en los términos siguientes:

“(…)

PRUEBAS

1. **DOCUMENTAL PÚBLICA.-** Consistente en las actas circunstanciadas que obran en el expediente TEEBCS-PES-014/2021 y que se solicita a esta UTF que requiera al TEEBCS;

2. **DOCUMENTAL PRIVADA.-** Consistente en copia simple de la resolución TEEBCSPES-014/2021 del TEEBCS y se solicita a esta UTF que requiera copia certificada de la misma a ese tribunal;

3. **PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA.** En todo lo que favorezca a la suscrita consistente en los razonamientos lógico- jurídicos que realice esa autoridad;

4. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Consistente en todas y cada una de las constancias que integran el expediente y que favorezcan a la suscrita.

(…)”

III. Acuerdo de recepción del procedimiento de queja. El siete de mayo dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral¹ acordó integrar el expediente **INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS**, y con esa misma fecha se

¹ En adelante, Unidad Técnica de Fiscalización

ordenó se registrara en el libro de gobierno, se dio por iniciada la etapa de diligencias previas, así como notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre su recepción, reservándose la admisión para el caso de que resultara procedente (Foja 11 del expediente).

IV. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19428/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto, la recepción de la queja de mérito (Foja 12 del expediente).

V. Escrito de alcance de denuncia fiscalización por el C. Sergio Javier Burgoin García en su carácter de autorizado por la denunciante. El siete de mayo dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/BCS/JLE/VS/0688/2021 signado por el Mtro. Juan Pablo Figueroa García, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California Sur, por medio del cual remite escrito de alcance presentado por el C. Sergio Javier Burgoin García en su carácter de autorizado por la denunciante, remitiendo el escrito de alcance, escrito de queja y el Procedimiento Especial Sancionador TEEBCS-PES-14/2021 (Fojas 13-69 del expediente).

VI. Solicitud de información al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

a) El trece de mayo de dos mil veintiuno, a través del oficio INE/UTF/DRN/21173/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para esclarecer los hechos objeto del procedimiento administrativo sancionador electoral (Fojas 70-71 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido respuesta por parte del requerido.

VII. Solicitud de información al Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, a través del oficio INE/UTF/DRN/21174/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur para esclarecer los hechos objeto del procedimiento administrativo sancionador electoral. (Fojas 72-73 del expediente).

b) Mediante oficio TEEBCS-SG/279/2021 de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur proporcionó la información solicitada (Fojas 74-290 del expediente).

VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27482/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 291-296 del expediente).

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Partido Verde Ecologista de México.

a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27486/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al partido político quejoso, corriéndosele traslado con copia simple del acuerdo respectivo. (Fojas 297-304 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido respuesta por parte del requerido.

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. Víctor Manuel Castro Cosío.

a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27485/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al C. Víctor Manuel Castro Cosío, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del acuerdo respectivo (Fojas 305-314 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido respuesta por parte del requerido.

XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al partido político Morena.

a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27483/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del acuerdo respectivo (Fojas 315-324 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido respuesta por parte del requerido.

XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al partido político del Trabajo.

a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27484/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) con las constancias que integran el escrito de queja, así como con copia simple del acuerdo respectivo (Fojas 325-334 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido respuesta por parte del requerido.

XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.

a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29661/2021, se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante, Dirección de Prerrogativas), informara sobre el C. Víctor Manuel Castro Cosío, como posible integrante de la estructura partidaria o militantes de MORENA o la Coalición “Juntos Haremos Historia”, denunciado en el presente asunto (Fojas 335-337 del expediente).

b) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9102/2021 de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos proporcionó la información solicitada (Fojas 338-340 del expediente).

XIV. Solicitud de información a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral.

a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29658/2021, se requirió a la Coordinación Nacional de Comunicación

Social (en adelante, Coordinación Nacional), informara a través del SAI, sobre el C. Víctor Manuel Castro Cosío, denunciado en el presente asunto (Fojas 341-343 del expediente).

b) Mediante oficio INE/CNCS-DCyAI/135/2021 de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Coordinación Nacional proporcionó la información solicitada (Fojas 344-346 del expediente).

XV. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.

a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29660/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral, certificara una página de internet (Fojas 347-349 del expediente).

b) Mediante oficio INE/DS/1705/2021 de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral proporcionó la información solicitada (Fojas 350-364 del expediente).

XVI. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización.

a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/995/2021, se requirió a la Dirección de Programación Nacional, información que obra en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (Fojas 365-367 del expediente).

b) Mediante oficio INE/UTF/DPN/295/2021 de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, la Dirección de Programación Nacional proporcionó la información solicitada (Fojas 368-370 del expediente).

XVII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33553/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral, certificara diversas ligas electrónicas (Fojas 371-374 del expediente).

b) Mediante oficio INE/DS/2065/2021 de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral proporcionó la información solicitada (Fojas 375-402 del expediente)

XVIII. Solicitud de información al partido político Morena.

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33554/2021 se requirió al partido político Morena, para que brindara información sobre la selección interna de sus candidatos al cargo de Gubernatura (Fojas 403-406 del expediente).

b) Mediante oficio sin número recibido el ocho de julio de dos mil veintiuno, el partido político Morena dio respuesta al requerimiento solicitado (Fojas 407-423 del expediente).

XIX. Solicitud de información al C. Víctor Manuel Castro Cosío.

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33547/2021 se requirió al C. Víctor Manuel Castro Cosío, para que brindara información sobre proceso interno de selección de candidatos de Morena (Fojas 424-445 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido respuesta por parte del requerido.

XX. Solicitud de información a Facebook Inc.

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33543/2021 se requirió a Facebook Inc., para que brindara información sobre diversas ligas electrónicas de esa dicha social (Fojas 446-449 del expediente).

b) Mediante escrito sin número de fecha once de julio de dos mil veintiuno, Facebook Inc. dio respuesta al requerimiento solicitado (Fojas 450-497 del expediente).

XXI. Solicitud de información a Twitter International Company.

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33544/2021 se requirió a Twitter International Company, para que brindara información sobre diversas ligas electrónicas de esa dicha social (Fojas 498-501 del expediente).

b) Mediante escrito sin número y sin fecha, Twitter International Company dio respuesta al requerimiento (Fojas 502-506 del expediente).

XXII. Solicitud de información a la Dirección Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.

a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1362/2021, se requirió a la Dirección Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, para que informara sobre la detección de actividad contable de los denunciados en el periodo de precampaña (Fojas 514-516 del expediente).

b) Mediante oficio número INE/UTF/DA/2513/2021 de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento solicitado (Fojas 517-768 del expediente).

XXIII. Razones y constancias

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar los resultados de la Convocatoria al proceso interno de selección de las candidaturas para Gobernador de Baja California Sur (Fojas 396-399 del expediente).

b) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar los resultados de la búsqueda en la red social Facebook del C. Víctor Manuel Castro Cosío, en relación con publicaciones con actividades proselitistas o de precampaña. (Fojas 507-513 del expediente).

c) El siete de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar los resultados de la búsqueda en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, en relación con la capacidad económica reportada en el informe del C. Víctor Manuel Castro Cosío. (Fojas del expediente 817-820).

XXIV. Alegatos.

El catorce julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a los quejosos y a los sujetos denunciados para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley (Fojas 769-770 del expediente).

XXV. Notificación de Alegatos a la C. Jesús Armida Castro Guzmán en su carácter de candidata del Partido Verde Ecologista de México.

a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34996/2021, se hizo del conocimiento a la C. Jesús Armida Castro Guzmán en su carácter de candidata del Partido Verde Ecologista de México, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 771-779 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el ciudadano no dio respuesta.

XXVI. Notificación de Alegatos al C. Víctor Manuel Castro Cosío, otrora precandidato a Gobernador de Baja California Sur por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur.

a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35002/2021, se hizo del conocimiento del C. Víctor Manuel Castro Cosío, otrora candidato a Gobernador de Baja California Sur por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 780-789 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el ciudadano no dio respuesta.

XXVII. Notificación de Alegatos al C. José Alberto Benavides Castañeda Representante de Finanzas del Partido del Trabajo.

a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35336/2021, se hizo del conocimiento del Partido del Trabajo, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 790-799 del expediente).

b) Al momento de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido respuesta por parte del requerido.

XXVIII. Notificación de Alegatos al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga Representante de Finanzas del partido político Morena.

a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34999/2021, se hizo del conocimiento del Partido Morena su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 800-809 del expediente).

b) Mediante oficio sin número recibido el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el partido político Morena dio formuló los alegatos que su derecho convenían (Fojas 810-816 del expediente).

XXVIII. Cierre de instrucción. El 19 de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente

XXIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales integrantes de la misma: Consejera Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y la Consejera Presidenta de dicha Comisión la Dr. Adriana M. Favela Herrera.

Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. COMPETENCIA. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. ESTUDIO DE FONDO. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, se desprende que, el fondo del asunto que nos ocupa consiste en determinar si el partido político Morena incurrió en infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización consistentes en informe omiso, ingresos no comprobados, ingresos no reportados, egresos no reportados, egresos no comprobados, derivado de la presunta precampaña que realizó el C. Víctor Manuel Castro Cosío y su omisión en el reporte de ingresos y gastos correspondiente, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Baja California Sur.

2.1 MATERIAL PROBATORIO.

2.1.a PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.

2.1.b. PRUEBAS APORTADAS POR LA C. JESÚS ARMIDA CASTRO GUZMÁN.

2.2 ANÁLISIS DEL CASO.

2.1 MATERIAL PROBATORIO.

2.1.a PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.

- **Documental Pública.** Oficio TEEBCS-SG/279/2021 de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en el cual remite copia certificada del expediente TEEBCS-PES-14/2021.

- **Documental Pública.** Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9102/2021 de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el cual remite la información encontrada en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos.
- **Documental Pública.** Oficio INE/CNCS-DCyAI/135/2021 de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Coordinación Nacional, mediante el cual remite la información derivada de la revisión en medios electrónicos, digitales y redes sociales del C. Víctor Manuel Castro Cosío.
- **Documental Pública.** Oficio INE/DS/1705/2021 de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral, por medio de cual certifica las direcciones electrónicas requeridas.

De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su autenticidad y los hechos que en ellas se consignan.

- **Documental Privada.** Escrito de fecha once de julio de dos mil veintiuno emitido por Facebook Inc., por medio del cual remite la información correspondiente a los gastos realizados por el C. Víctor Manuel Castro Cosío en dicha plataforma social.
- **Documental Privada.** Escrito en representación de Twitter International Company, por medio del cual proporciona información sobre las cuentas verificadas de Twitter.

De conformidad con el artículo 16 numeral 2, de conformidad con el artículo 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las probanzas documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

2.1.b. PRUEBAS APORTADAS POR LA C. JESÚS ARMIDA CASTRO GUZMÁN.

Se procede a identificarse de manera individual cada uno de los medios de convicción ofrecidos por la C. Jesús Armida Castro Guzmán, en su carácter de candidata del Partido Verde Ecologista de México en su escrito inicial de queja, mismos que se valoran a continuación:

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las actas circunstanciadas que obran en el expediente TEEBCS-PES-014/2021 y que se solicita a esta UTF que requiera al TEEBCS;

2. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de la resolución TEEBCSPES-014/2021 del TEEBCS y se solicita a esta UTF que requiera copia certificada de la misma a ese tribunal;

De conformidad con los artículos 16, numerales 2, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor indiciario.

3. PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. En todo lo que favorezca a la suscrita consistente en los razonamientos lógico- jurídicos que realice esa autoridad;

Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las constancias que integran el expediente y que favorezcan a la suscrita.”

Se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

2.2 ANÁLISIS DEL CASO

En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de Ley General de Partidos Políticos 96, numeral 1 y 127, numeral 1 y 223, numeral 6, inciso a) del

Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se transcriben a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

(...)”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96

Control de ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)”

“Artículo 127.

Documentación de los egresos

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales (...)”

“Artículo 223.

Responsables de la rendición de cuentas

(...)

6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán responsables de:

a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición.

(...).”

De las premisas normativas transcritas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar en tiempo, ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña en el marco de un Proceso Electoral. En ellos deberán de informar sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Lo anterior tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante la obligación relativa a la presentación de informes. Ello implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos políticos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que ésta autoridad cumpla con tareas de fiscalización encomendadas a cabalidad.

En ese sentido, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma de todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar. Para el correcto desarrollo de su contabilidad, los sujetos obligados deberán presentar una adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los requisitos establecidos por la normatividad electoral, a través de la utilización de los instrumentos que la legislación establezca y permitiendo a la autoridad realizar las actividades fiscalizadoras.

Así pues, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es la rendición de cuentas ante la autoridad de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

En efecto, la finalidad ulterior es la de garantizar que la actividad de los entes políticos se conduzca en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para las y los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino también lo son, de manera solidaria, todos los precandidatos(as). De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos, siendo ellos quienes deberán llevar control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. Por lo que, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y precandidatos(as) cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido.

En este sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”*

Así, esa responsabilidad solidaria, se ve normada por el artículo 223 numeral 6, inciso a), al señalar que las y los precandidatos postulados por partidos son responsables de presentar su informe de gastos de precampaña al partido que los postula.

En conclusión, los partidos políticos y las y los precandidatos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes de precampaña en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

Dicho lo anterior, resulta de vital importancia acotar el marco conceptual, para sentar las bases de la determinación respecto a los hechos objetos de investigación que en derecho proceda, en los términos siguientes:

a) Proceso de selección interna.

El artículo 226, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el plazo legal para que los partidos políticos determinen, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular es de treinta días antes del inicio formal de los procesos internos de selección.

La determinación del procedimiento aplicable para los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular deberá señalar:

- La fecha de inicio del proceso interno;
- El método o métodos que serán utilizados;
- La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;
- Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;
- Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y
- La fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna.

En virtud de lo anterior, si bien la ley no prevé un método determinado al ser parte de la vida interna del partido, ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo los procesos de selección interna de los candidatos que pretendan buscar la postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los

actos de selección interna generan que los partidos, militantes, afiliados y simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad (volantes, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario para ser candidatos y expresar que cuentan con el perfil que se identifique con la ideología sustentada por el propio ente político; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto dispongan los Estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser postulado.

b) Precampaña.

En términos del artículo 227, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por precampaña al conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos(as) a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; mientras que por actos de precampaña electoral, se entenderán a las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos eventos en que las y los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

Asimismo, el numeral 3 del citado precepto, señala que la propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido por la Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden las y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

El artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo al inicio de las precampañas y de acuerdo con la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos, determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña. Concatenado con lo anterior, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la ley en cita, impone la obligación a los partidos políticos de presentar informes de precampaña para cada uno de las y los precandidatos a candidatos a un cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

De ahí que, de conformidad con el artículo 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos(as) del partido político y cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de candidatos.

c) Concepto de precandidato(a).

En términos del artículo 227 numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precandidato(a) es *“el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.”*

Por su parte, el artículo 4, numeral 1, inciso pp) del Reglamento de Fiscalización establece lo siguiente:

“Artículo 4.

Glosario

1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

(...)

pp) Precandidato: Ciudadano que conforme a la Ley de Partidos y a los Estatutos de un partido político, **participa en el proceso de selección interna de candidatos** para ser postulado como candidato a cargo de elección popular.”

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha definido a los precandidatos, en su glosario de términos,² de la siguiente manera:

“Es el *ciudadano que participa en la elección interna de algún partido político, cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido para desempeñar un cargo de elección popular.*”

² Disponible en la página web: <https://www.te.gob.mx/front/glossary/>

En este sentido, es dable señalar que los ciudadanos que pretendan ser postulados por un partido político como **candidato a cargo de elección popular, deben ser considerados como precandidatos(as), con independencia de que obtuvieran del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatos(as).**

Lo anterior es congruente con lo razonado por la Sala Superior del TEPJF al resolver Recurso de Apelación SUP-RAP-121/2015 y Acumulado cuya parte se transcribe a continuación:

*“A juicio de esta Sala Superior no asiste la razón a los actores porque conforme a lo establecido en el artículo 227, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, **se colige que un precandidato es en términos generales un ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a algún cargo de elección popular, conforme a esta Ley y al Estatuto de un partido político, en el procedimiento de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, sin que tal calidad se constriña, conforme a la ley, a algún procedimiento de selección en particular como lo aducen los demandantes.** El texto del mencionado precepto legal es al tenor literal siguiente:*

‘Artículo 227. [...]

4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.’

Aunado a lo anterior, es importante destacar que, conforme a lo previsto en la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA AL CARGO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, de manera particular en la Base 7, denominada “DE LAS NORMAS DE PRECAMPAÑA” se estableció:

*7.6 Todos los **contendientes** deberán denominarse públicamente como precandidatos o precandidatas, debiendo utilizar el logotipo, colores y*

emblemas del Partido, en su propaganda, en la cual además deberán identificar que se trata de una elección interna del Partido.³

En este contexto, se debe destacar que, con independencia de que obtuvieran del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro como precandidatos, lo cierto es que tanto el partido político recurrente como cada uno de los actores del juicio para la protección de los derechos político-electorales en sus escritos de demanda aceptan que cada uno de ellos tuvieron el carácter de aspirante a candidato a diputado o a integrante de ayuntamiento, en consecuencia, tal afirmación constituye un reconocimiento expreso, por lo que se trata de un hecho no controvertido en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

*En tal orden de ideas esta Sala Superior considera que **la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna por voto universal, libre, directo y secreto, en los Distritos Electorales Locales y Municipios en los que no se reservaron candidaturas o bien en los casos en los que sean designados de un conjunto de aspirantes. [...]***

'Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: [...]

d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley;'

(...) lo cierto es que de los preceptos trasuntos, particularmente de lo dispuesto en el artículo, 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se puede colegir que, con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso y, en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

³ Es importante señalar que la Base Primera de la Convocatoria de MORENA para el proceso de selección de las candidaturas para Presidentes y Presidentas Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos; para el proceso electoral local 2018 – 2019 en el Estado de Aguascalientes establece en su último párrafo lo siguiente: "(...) Queda estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física o moral contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de la **precandidatura** correspondiente."

*En este tenor, **tampoco tienen razón los demandantes al considerar que por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos no tienen la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien es cierto que atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran que llevar a cabo actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la presentación de informes sin hacer distinción alguna.***

(...)

Por tanto, no asiste la razón al partido político apelante al aducir que no tenía la obligación de presentar informes.

(...) a juicio de esta Sala Superior, (...) el artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracciones II y III, los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña y que los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas.

La interpretación que se hace de tales disposiciones es acorde a la teleología de las normas a partir de las recientes reformas constitucionales y legales en materia electoral, conforme a las cuales se fijó entre los principales objetivos:

- La eficiencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, dada su relación con la equidad en los procedimientos electorales.*
- Integrar un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.*
- Evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.*

Al efecto se citan los párrafos atinentes de la Exposición de Motivos de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS
POLÍTICOS**

*'[...] En este sentido, la Iniciativa que hoy sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía tiene por objeto, además de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, establecer una legislación que regule de manera eficaz a los partidos políticos existentes en el país, ya sea nacionales o locales, en aspectos tales como su integración, registro, participación política, representación, acceso a la información pública, **así como la fiscalización y el régimen de sanciones por incumplimiento a las disposiciones en materia electoral.***

Incluso en la discusión de la citada reforma constitucional, los aspectos antes mencionados se consideraban como asuntos internos de los partidos políticos, por lo que no era posible realizar una fiscalización efectiva, aun cuando disponen de presupuesto público. Adicionalmente, los mecanismos para definir a los candidatos a cargos de elección popular eran cuestionados tanto al interior del partido como al exterior, con el argumento, por ejemplo, de la permanencia de las mismas estructuras en órganos de gobierno, circunstancia que obstruye la generación de nuevos cuadros políticos y de representación.

Ante este escenario, resulta de vital importancia limitar el espacio discrecional de los partidos políticos, trasladando a la esfera de lo público aquellos aspectos que garanticen por un lado, el acceso efectivo de los ciudadanos al poder público, por medio del establecimiento de derechos mínimos y obligaciones a cargo de los militantes; así como un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.

Además, se deben establecer condiciones de permanencia y en su caso, de cancelación del registro de partidos políticos, pues también es cuestionable la existencia de partidos políticos sin la suficiente legitimación social, al observarse desde una matriz de costo beneficio para el país. En congruencia con esto, no es tema menor el establecimiento de mecanismos de participación política, como las coaliciones y fusiones políticas, como paradigmas de fortalecimiento electoral de los partidos políticos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

'Mención particular merecen la regulación que se propone en las materias siguientes:

1. Fiscalización efectiva y oportuna de los recursos que utilicen las asociaciones políticas y candidaturas. Se revoluciona el modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas, pasando de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia y monitoreo, de tal suerte que la presentación de informes marquen la conclusión del proceso de fiscalización y no su inicio, tan sólo a la espera de su dictaminación final, que en el caso de las informes de gastos de campaña sea, de ser el caso, parte de los elementos de la declaración de validez de las elecciones.

*Estableciendo para los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia y verificación de las mismas el principio de máxima publicidad **con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.***

*En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior sería contrario al sentido de la reforma constitucional y legal excluir a determinados sujetos obligados, del cumplimiento de las normas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, máxime que **las normas atinentes no vinculan la presentación de los informes al hecho de llevar a cabo o no, actos de precampaña**, por tanto **es deber de los sujetos obligados** conforme a la Ley, con independencia de que no hayan llevado a cabo actos de campaña, **presentar los informes de precampaña** conforme a lo previsto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.”*

Es preciso señalar que ese asunto que resolvió el máximo órgano jurisdiccional tuvo como objeto de estudio, entre otras cosas, determinar si diversos ciudadanos que participaron en el proceso de selección adquirieron la calidad de precandidatos(as) y con ello la obligación de presentar los informes de precampañas de ingresos y egresos en el Proceso Electoral 2014-2015, y como se transcribió en líneas anteriores, resolvió que con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso y, en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

En ese sentido determinó que en el referido asunto no le asistía la razón al actor al considerar que por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos(as) no tienen la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien,

atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran que llevar a cabo actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la presentación de informes sin hacer distinción alguna.

De manera análoga, la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional y para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados como SM-JRC-71/2016 y SM-JDC-244/2016, realizó razonamientos similares, cuya parte se transcribe a continuación:

*“En principio, es de mencionarse que MORENA y María Soledad Luévano Cantú sí estaban obligados a presentar el referido informe, ya que **el carácter de precandidata de la referida ciudadana quedó acreditado mediante el Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA sobre el Proceso Interno Local en el Estado de Zacatecas**, de veintinueve de enero del presente año (...)*

Por otra parte, esta Sala Regional ha sostenido que la obligación de los partidos de presentar informes tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y la rendición de cuentas, ya que el informe es el instrumento a través del cual los partidos rinden cuentas respecto del origen de sus recursos así como el destino de su aplicación, por tanto, es solo a través de su presentación que la autoridad puede llevar a cabalidad sus tareas de fiscalización.

*En ese sentido, **MORENA sí estaba obligado a presentar el informe de precampaña** de María Soledad Luévano Cantú, **con independencia de la realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta manera la autoridad puede realizar su labor de fiscalización.***

Por otra parte, no se comparte la afirmación del partido promovente en cuanto que la presentación de los informes de precampaña sea solo “una mera formalidad”, esto se debe a que, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 443, numeral 1, inciso d), de la LEGIPE, los partidos políticos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, los respectivos informes de precampaña y campaña, con la finalidad de transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora.

En ese sentido, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la omisión o presentación extemporánea de los informes de ingresos y gastos de los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico

relacionado con la rendición de cuentas y a los principios de fiscalización, que impide garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Conforme a lo expuesto, se constata el incumplimiento de MORENA en materia de fiscalización al haber omitido presentar el informe de precampaña de María Soledad Luévano Cantú.”

En la resolución transcrita, la Sala Regional Monterrey del TEPJF razonó que los sujetos obligados sí tienen la obligación de presentar el informe de precampaña con independencia de la realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta manera la autoridad puede llevar a cabalidad sus tareas de fiscalización. También que la presentación de los informes no es una mera formalidad, toda vez que los partidos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, en este caso, los informes de precampaña y ante la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo es la omisión de los informes, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la rendición de cuentas.

De lo hasta aquí expuesto, se **puede establecer que las personas que participen en los procesos de selección interna de candidatos y sean registrados de conformidad con los Estatutos**, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, con la finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben ser considerados precandidatos(as), con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el proceso, y por ende, tienen la obligación de presentar el informe de gastos de precampaña.

Lo anterior es así, toda vez que, iniciado el Proceso Electoral correspondiente y de conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos deben de contar con un órgano de decisión colegiada, responsable de la organización de la selección de candidatos a cargos de elección popular,⁴ ante el cual una vez emitida la convocatoria respectiva, la ciudadanía interesada deberá obtener su registro para adquirir la calidad de aspirante o precandidato(a) para estar en posibilidad de participar en el Proceso Electoral Local o federal de mérito.

⁴ Conforme a lo establecido en los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, corresponde a la Comisión Nacional de Procedimientos Internos conducir los procesos de postulación de candidatos en el ámbito federal, Estatal, municipal y delegacional.

En ese sentido, se considera que cuando la convocatoria refiera a la figura de aspirante se entiende que se refiere a un precandidato(a), toda vez que con dichas calidades se busca el mismo objetivo, es decir, obtener una candidatura, ya sea a través de la celebración de la asamblea correspondiente, de la valoración y calificación de perfiles o cual sea el método por el que se lleve a cabo la elección de candidatos. Lo anterior pone en evidencia que, con independencia de la denominación que se les dé a los precandidatos(as), se encuentran sujetos a la fiscalización de los recursos que utilicen.

En este contexto, si bien la convocatoria que se emita únicamente puede hacer mención a la calidad de “aspirante”, la misma debe entenderse atendiendo a la naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acuden al proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como candidato a un cargo de elección popular.

De igual forma, conforme a los artículos 43, numeral 1, inciso c) y 77 de la Ley General de Partidos Políticos, entre los órganos internos de los partidos políticos, se encuentra el órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y generales, así como de la presentación de los informes respectivos de ingresos y egresos, entre los cuales se encuentra la presentación del informe de precampaña.

Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en el artículo 223, numerales 1, 3, inciso b) y 7, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, al señalar que el responsable de finanzas del partido político de que se trate, será el responsable de: a) la presentación de los informes, su contenido y su documentación comprobatoria; b) capacitar a los precandidatos(as) en la aplicación del Reglamento de Fiscalización, debiendo contar con constancia escrita de ello; y c) establecer las medidas de control interno necesarias para garantizar la aplicación estricta del Reglamento referido; cuyo incumplimiento tiene como consecuencia que se considere una infracción cometida por parte del partido político, en términos del artículo 226, numeral 1 incisos c) y k) del Reglamento de Fiscalización.

Así las cosas, se advierte una obligación específica por parte de los partidos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por cada precandidatura.

En este sentido, la obligación original de rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, toda vez que es el responsable de finanzas del ente político, el que debe de presentar los informes de precampaña y de

incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, como sujeto principal de dicha obligación.

De esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna por voto universal, libre, directo y secreto, como se advierte del texto de los preceptos que se citan a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones **de los partidos políticos** a la presente Ley:

(...)

d) **No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus Reglamentos;**”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones **de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular** a la presente Ley:

(...)

d) **No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley;**”

Ley General de Partidos Políticos

Capítulo V.

***De los procesos de integración de órganos internos
y de selección de candidatos***

“Artículo 44

1.

Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los Lineamientos básicos siguientes:

(...)

*IX. Fechas en las que se **deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña**, en su caso.”*

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;”

Asimismo, el Reglamento de Fiscalización aplicable establece:

“Artículo 3.

Sujetos obligados

1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son:

a) Partidos políticos nacionales.

b) Partidos políticos con registro local.

c) Coaliciones, frentes o fusiones que formen los Partidos Políticos Nacionales y locales.

d) Agrupaciones políticas nacionales.

e) Organizaciones de observadores electorales en elecciones federales.

f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional.

g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular federales y locales.

h) Personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

2. Los Partidos Políticos Nacionales con acreditación para participar en elecciones locales, tendrán el mismo trato que un partido político local en el ámbito de las elecciones locales y las obligaciones materia de este Reglamento.

3. Los partidos, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes locales y federales deberán inscribirse en el Sistema de Registro Nacional de Candidatos de conformidad con los Lineamientos y requisitos que para tal efecto disponga el Instituto. La cuenta de correo electrónico proporcionada en el Registro Nacional de Candidatos será la base

para que los sujetos obligados reciban avisos electrónicos, comunicados e información relacionada con los procesos de fiscalización a cargo del Instituto.

Una vez realizada la inscripción en el Sistema antes citado, el Instituto entregará a cada aspirante, precandidato, candidato, y candidato independiente la cuenta de ingreso al Sistema de Contabilidad en Línea para la consulta de sus operaciones.”

“Artículo 22.

De los informes

1. Los informes que deben presentar los sujetos obligados son los que establecen la Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y pueden clasificarse de la manera siguiente:

a) Informes del gasto ordinario:

I. Informes trimestrales.

II. Informe anual.

III. Informes mensuales.

b) Informes de Proceso Electoral:

I. Informes de precampaña.

II. Informes de obtención del apoyo ciudadano.

III. Informes de campaña.

c) Informes presupuestales:

I. Programa Anual de Trabajo.

II. Informe de Avance Físico-Financiero.

III. Informe de Situación Presupuestal.”

Así, de los preceptos normativos citados, se advierte que con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas, existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña, constituyendo una infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

En consecuencia, la ciudadanía que participe en los procesos de selección interna de candidaturas para un cargo de elección popular y sea registrada de conformidad con los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, con la finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben ser considerados precandidatos(as), y, por ende, deben presentar el informe de precampaña correspondiente.

d) Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR)

Tal como se desprende de la normatividad señalada, son los partidos políticos quienes deben llevar a cabo las acciones necesarias para registrar a sus precandidatos(as) y, en consecuencia, que estos puedan informar sobre sus ingresos y gastos. Lo anterior se logra mediante el registro de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR), así como en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

En ese sentido, sirve de criterio orientador lo señalado por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al emitir la sentencia en el expediente identificado con el número SM-JDC-65/2017 y acumulado SM-JDC-66/2017 y determinar lo siguiente:

*“(...) esta Sala advierte que la autoridad da a conocer al aquí actor, que **el partido político que lo postuló estuvo en posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para registrarlo como precandidato y, en consecuencia, que pudiera informar sobre sus ingresos y gastos vía el SIF.** Gastos de propaganda que, además, le mencionó había detectado, como se evidencia del siguiente párrafo extraído del oficio al que nos referimos antes, en el cual se indica textualmente: (...)*

Efectivamente, se tiene que si bien por un lado el partido que lo propone dice que fue candidato único y que no hizo precampaña, también se aprecia de autos que el actor tuvo tal carácter, como lo hace patente la constancia de precandidatura expedida por el Presidente del Consejo Político y por el Presidente del Comité Estatal del Partido Joven, y él mismo reconoce que sí realizó actos de precampaña, en su oficio de respuesta a la autoridad.

*De ese oficio debe destacarse que, en unión al diverso oficio de requerimiento de la autoridad, permiten concluir que no pudo en efecto acceder el SIF, **y ello obedeció a un acto atribuible al partido**, como fue reconocido por la Unidad de Fiscalización, en la medida en que expone que le dio esa opción en el oficio de errores y omisiones y el partido tomó una posición pasiva, **al dejar transcurrir el plazo que le fue dado para pedir la habilitación del precandidato en el SNR y el SIF.***
(...)”

[énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que es obligación del partido político realizar las acciones conducentes para registrar a las y los precandidatos en el SIF y en el SNR para el efecto de rendir sus respectivos informes de ingresos y gastos de precampaña.

Para robustecer lo antes señalado, debemos atender las reglas que establece el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la operación del SNR, en el cual se establece lo siguiente:

- El partido político es responsable de la operación del Sistema y, entre otras, de las siguientes actividades:
 - Administrar al interior de su partido, las cuentas de los usuarios para la operación del multicitado Sistema.
 - Autorizar y crear la cuenta de un responsable del SNR por entidad, en el caso de los Partidos Políticos Nacionales con representación local.
 - Aprobar en el SNR la solicitud de registro de las personas que, de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por el instituto político, hayan sido aceptadas como precandidatos(as).
 - Autorizar en el SNR la solicitud de registro de las personas que de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por el partido que representan, hayan sido seleccionadas para postularlas a las candidaturas, ante el Instituto o el Organismo Público Local, según el ámbito de elección.
- El partido deberá capturar las fechas en las que se llevará a cabo el registro de precandidaturas y en las que se realizarán las actividades de precampaña.
- El ciudadano aspirante a ser precandidato(a) deberá entregar ante el órgano facultado del partido, el formulario de registro y el informe de capacidad económica impreso con firma autógrafa generado por el sistema, junto con la documentación adicional que al efecto señale el partido político. El llenado del formulario de registro no otorga **la calidad de precandidata o precandidato, ésta se obtiene hasta el momento en que el partido político determine su procedencia, de conformidad con los requisitos establecidos en su convocatoria.**
- La persona que aspira a la precandidatura por el partido político será la responsable de la veracidad de la información contenida en el formulario de registro, de los datos del informe de capacidad económica, de la aceptación para recibir notificaciones electrónicas y de la firma autógrafa de este formulario

de registro, así como de proporcionarlo al partido político en los plazos y cumpliendo los requisitos que el mismo haya establecido.

Al respecto, es preciso señalar que con fundamento en los artículos 267, numeral 2; 270, numeral 1 y 281 del Reglamento de Elecciones, los partidos políticos deben realizar el registro de precandidaturas y candidaturas en el SNR implementado por el propio Instituto, tanto en elecciones federales como locales ya sean ordinarias o extraordinarias, toda vez que constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos.

e) Sistema Integral del Fiscalización.

Los partidos políticos tienen la obligación de registrar en los sistemas de fiscalización a las y los precandidatos para el efecto de que éstos puedan tener acceso a los mismos y con ello poder reportar los ingresos y gastos que, en su caso, hayan realizado en el periodo de precampaña. En consecuencia, y atendiendo a lo establecido en la ley, el deber de presentación de los diversos informes es una obligación compartida entre los partidos políticos y los precandidatos(as), pues por un lado, es deber de los partidos políticos realizar los trámites necesarios para que las personas que adquieran una precandidatura estén en condiciones de informar en tiempo real los ingresos y gastos que tengan con motivo de esa calidad y finalmente presentar ante el partido político correspondiente el informe para que este a su vez, cuente con los insumos necesarios para cumplir con su obligación ante la autoridad fiscalizadora.

Sobre este punto es importante señalar que la obligación de presentar un informe de precampaña de ninguna manera implica la imposición de una carga adicional ni un perjuicio a los sujetos obligados, pues en el caso en que no realizaran ningún gasto, únicamente se deberá presentar el informe correspondiente en ceros. Pues tal como fue señalado con anterioridad, el informe es el instrumento a través del cual los partidos rinden cuentas respecto del origen de sus recursos, así como el destino de su aplicación, y solo a través de su presentación la autoridad puede realizar sus tareas de fiscalización.

Al respecto, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG518/2020 por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.

En la especie, el artículo 18 del citado Acuerdo define los conceptos que se consideran gastos de precampaña.⁵ Asimismo, el artículo 27 del citado Acuerdo dispone que las y los precandidatos deberán presentar los informes de precampaña a través del partido político respectivo, atendiendo a los plazos que al efecto emita el Instituto⁶, esto es, existe una responsabilidad compartida entre los y las precandidatas y los partidos políticos, siendo estos los responsables directos ante la Unidad Técnica de Fiscalización los informes correspondientes.

De los razonamientos expuestos anteriormente es posible formular las siguientes conclusiones:

- Los partidos políticos tienen obligación de presentar informes de ingresos y gastos de precampaña.
- Las y los precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de la obligación de entregar dichos informes.
- La obligación de los partidos políticos de presentar los informes existe con independencia de que se determinen las candidaturas de forma directa, sin importar si es sólo un precandidato(a), el método electivo, ni el nombre con que se designe al precandidato(a).
- Los partidos son directamente responsables, en materia de fiscalización, de llevar un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos

⁵ **Artículo 18.** En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4 y 211, párrafos 1, 2 y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la LGIPE y 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos: **a)** Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos o precandidatas con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular. **b)** Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares; **c)** Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el partido y precandidata o precandidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; **d)** Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo; **e)** Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos de campaña; **f)** Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser personas candidatas cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de las y los candidatos.

⁶ **Artículo 27.** Las y los precandidatos, incluyendo aquellos que hayan optado por la reelección, deberán presentar los informes de precampaña a través del partido político respectivo, con apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto transitorio de la LGIPE. Se deberá presentar un informe por precandidato o precandidata.

efectuados, por todos y cada uno de las y los precandidatos participantes en el proceso de selección interna.

- En el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña, existe el imperativo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, para lo cual es necesario presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros.

Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, y una vez precisadas las cuestiones normativas previstas en la norma se deberá analizar el origen los motivos que dieron lugar el inicio de este procedimiento.

El seis de mayo del dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por la C. Jesús Armida Castro Guzmán en su carácter de candidata a la gubernatura del estado de Baja California Sur por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California Sur” integrada por los partidos Morena y del Trabajo, así como de su presunto precandidato a la Gubernatura de Baja California Sur, el C. Víctor Manuel Castro Cosío, por medio del cual denunciaba omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña correspondiente al C. Víctor Manuel Castro Cosío, en carácter de precandidato a ocupar el cargo de gobernador del estado de Baja California Sur, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

Asimismo, en su escrito de queja presenta como prueba el procedimiento especial sancionador TEEBCS-PES-014/2021, mediante el cual alega que en la sentencia del mismo, el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur reconoce el carácter de C. Víctor Manuel Castro Cosío como precandidato a la gubernatura del Estado de Baja California Sur por parte de la Coalición Junto Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena y Partido del Trabajo.

Posteriormente, el diecisiete de mayo del presente año, se recibió el escrito de alcance presentado por el C. Luis Samuel Martínez Athié, autorizado por la denunciante Jesús Armida Castro Guzmán, por medio del cual presentó capturas de pantalla así, así como ligas de internet respecto de gasto en publicidad de Facebook que Morena realizó durante la etapa de precampañas en favor del denunciado C. Víctor Manuel Castro Cosío.

Esta Unidad Técnica de Fiscalización recibió la queja de mérito e inicio la etapa de diligencias previas para para allegarse de mayores elementos que permitan esclarecer los hechos objeto del procedimiento administrativo sancionador electoral en el que se actúa. En consecuencia, se requirió al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y al Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

Por lo anterior, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur remitió por medio del oficio TEEBCS-SG/279/2021 de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en el cual remite copia certificada del expediente TEEBCS-PES-14/2021. Dicho procedimiento se originó por una denuncia realizada por la C. Jesús Armida Castro Guzmán en contra del C. Víctor Manuel Castro Cosío por una presunta comisión de actos anticipados de campaña en publicaciones de Facebook, así como por diversas manifestaciones constituyen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Al respecto, en la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur al procedimiento enunciado, indicó lo siguiente:

“(…)

En este sentido como se ha sostenido en líneas precedentes, para que se configuren los actos anticipados de campaña es necesario que se acrediten los tres elementos en cuestión: personal, temporal y subjetivo; resultando necesario verificar si en el presente caso dichos elementos se actualizan, advirtiéndose lo siguiente:

- **Personal: se actualiza.** Los actos son realizados por Víctor Manuel Castro Cosío, toda vez que se encuentra en el perfil de Facebook del denunciado, sin que hubiese negado tales publicaciones. En el caso, el denunciado es plenamente identificable como Coordinador de la Cuarta Transformación, por tanto, **se actualiza el elemento personal.**

En el caso, el denunciado señala que no se ostentaba con la calidad de precandidato o candidato, no obstante, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 de la Ley de Medios, que de la página de internet oficial del partido político MORENA, se observa que se encuentra publicado su registro al proceso de selección interna de la candidatura para gobernador del estado de Baja California Sur para el Proceso Electoral 2020-2021.

Así, la Sala Superior ha establecido que un precandidato o precandidata es, en términos generales, una persona que pretende ser postulado por un partido político como candidato a algún cargo de elección popular, conforme

a la ley y a la candidatura de un partido político, en el procedimiento de selección interna de precandidatura a cargos de elección popular, sin que tal calidad se limite, conforme a la ley, a algún procedimiento de selección en particular.

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado el criterio relativo a que los ciudadanos que pretendan ser postulados por un partido político como candidata o candidato a cargo de elección popular, deben ser considerados como precandidaturas, con independencia de que obtuvieran, del órgano partidista facultado para ello algún tipo de registro con la denominación de precandidatura.

*En esas condiciones, es inconcuso que se acredita el elemento personal, puesto que Víctor Manuel Castro Cosío es plenamente identificable como Coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, esto es, **como precandidato de MORENA para la gubernatura del Estado.***

- **Temporal: se actualiza.** Los actos que se analizan sucedieron en el periodo comprendido a la etapa procesal de "intercampaña", pues de conformidad con el Acuerdo IEEBCS-CG102-NOVIEMBRE-2020 emitido por el Consejo General del IEEBCS, las precampañas inician el 23 de diciembre y concluyen el 31 de enero de 2021, en tanto que la etapa de campaña inicia el 04 de abril. Como las manifestaciones fueron difundidas el 16 de febrero, se concluye la **actualización del elemento temporal.**
- **Subjetivo: no se actualiza.** De las publicaciones realizadas por el denunciado en la red social Facebook, no se aprecia que haga un llamado expreso para obtener apoyo electoral en forma de votos para sí, un partido político o terceras personas, sino que únicamente se limita a publicar fotografías, acompañadas de oraciones genéricas, las cuales no configuran algún tipo de propaganda electoral; por ello, se estima que **no se actualiza dicho elemento.**

(...)"

De la transcripción anterior, se puede concluir que el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, califica al **C. Víctor Manuel Castro Cosío como precandidato del partido político de Morena para la Gubernatura del estado de Baja California Sur al identificarlo como Coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur.**

Continuando con la investigación, el cuatro de junio de dos mil veintiuno se admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja y se dio por terminada la etapa de diligencias previas. Asimismo, el diez de junio de dos mil veintiuno se notificó el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. Víctor Manuel Castro Cosío, al partido político Morena y del Trabajo, sin obtener respuesta por ninguno de los denunciados.

De igual forma, el quince de junio del presente año se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que informara sobre el C. Víctor Manuel Castro Cosío, como posible integrante de la estructura partidaria o militantes de MORENA o la Coalición “Juntos Haremos Historia”. En consecuencia, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos informó que no se encontró coincidencia alguna dentro de los registros del padrón de personas afiliadas (militantes) a MORENA, así como al otro partido político que integra la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Baja California Sur” (Partido del Trabajo).

En la misma fecha, se requirió a la Coordinación Nacional de Comunicación Social Informara si en el marco del monitoreo de encuestas y propaganda publicada en medios impresos y electrónicos existía información sobre el C. Víctor Manuel Castro Cosío en el periodo de precampaña. Dicha Coordinación Nacional contestó el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, declarando que no se ubicaron piezas informativas en este ámbito de revisión.

De igual manera, el seis de julio de dos mil veintiuno se realizó un segundo requerimiento a la Dirección del Secretariado de Oficialía Electoral para que certificara las siguientes ligas electrónicas:

| ID | Enlace electrónico |
|----|---|
| 1 | https://www.facebook.com/ads/library/?id=738908040371299 |
| 2 | https://www.facebook.com/ads/library/?id=768707440665764 |
| 3 | https://www.facebook.com/ads/library/?id=211882200672638 |
| 4 | https://www.facebook.com/ads/library/?id=200695495084003 |
| 5 | https://www.facebook.com/radioformulalapaz/videos/736952120572069/?__tn__=%2CO-R |
| 6 | https://www.facebook.com/watch/?v=409403630334908 |

| ID | Enlace electrónico |
|----|---|
| 7 | https://twitter.com/VictorCastroCos/status/1350609156512903168?s=20 |
| 8 | https://twitter.com/VictorCastroCos/status/1352629293436682243?s=20 |
| 9 | https://twitter.com/VictorCastroCos/status/1354930466818650113?s=20 |
| 10 | https://twitter.com/MarioBeteta/status/1352626561543860224?s=20 |

Por otra parte, el seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia para asentar los resultados de la Convocatoria al proceso interno de selección de las candidaturas para Gobernador de Baja California Sur.

En esa misma fecha, se requirió al partido político Morena, para que brindara información sobre la selección interna de sus candidatos al cargo de Gubernatura. Al respecto la institución política realizó las declaraciones siguientes:

“(…)

Ahora bien, en relación a las personas que participaron, hago de su conocimiento que el único registro procedente correspondió al hoy Gobernador Electo, Víctor Manuel Castro Cosío y como su domicilio para todo lo relativo al expediente en que se actúa, deberá estarse al señalado en el proemio del presente escrito.

Se actualizó lo previsto en la parte final del punto 5 de la convocatoria respectiva, en relación a la literal t. del artículo 44 del Estatuto de morena.

Adjunto al presente, el acuse de recibo del aviso que morena presentó ante el OPLE de Baja California Sur, el diecisiete de febrero del año en curso; en el cual se hace del conocimiento de dicho órgano que no se celebraron actos de precampañas ni se erogaron recursos de nuestro instituto político para ejecutar actividad alguna.

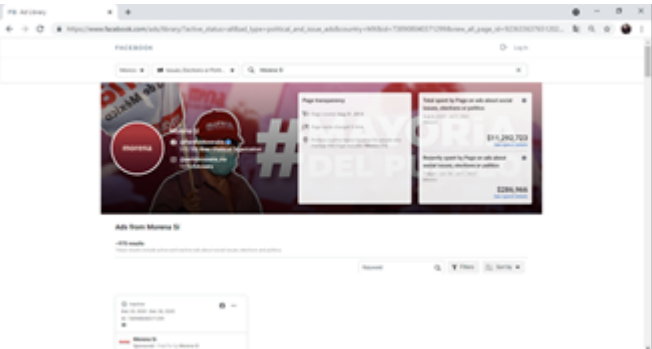
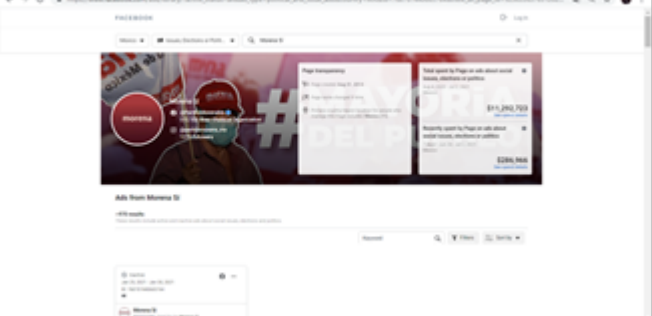
En el mismo aviso, se observa que se llevó a cabo el correspondiente aviso de no precampaña para la gubernatura de Baja California Sur, a través del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.
“(…)”

De igual forma, se solicitó al C. Víctor Manuel Castro Cosío, para que brindara información sobre proceso interno de selección de candidatos de Morena. Es importante señalar que el oficio de requerimiento de información fue recibido por el C. Irán Norberto Molina Cosío, familiar del denunciado, por lo que el C. Víctor

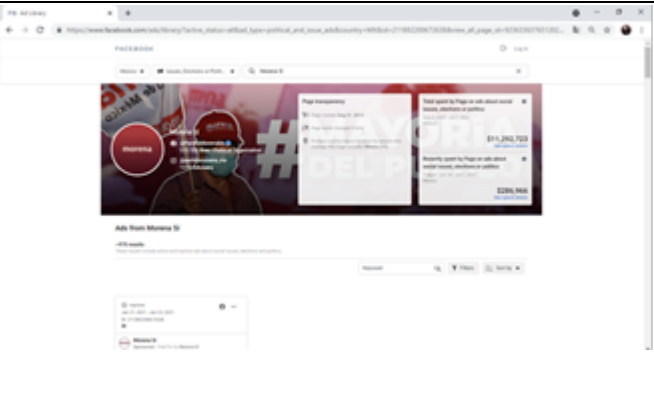
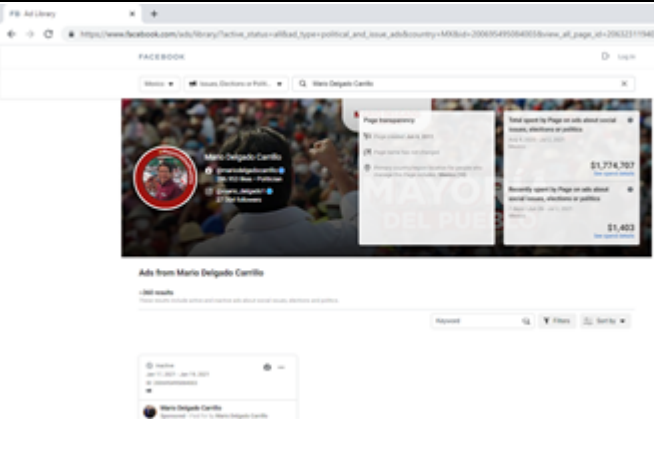
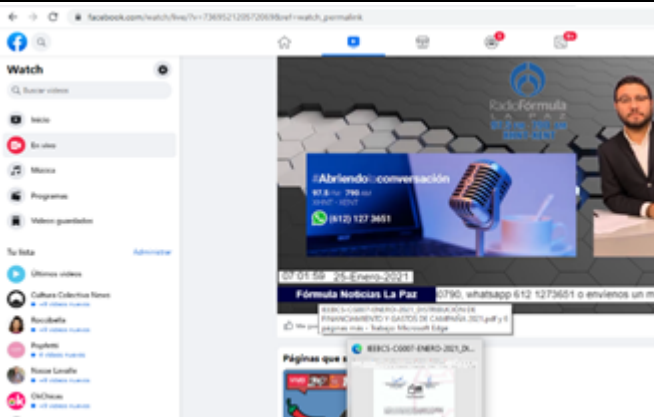
Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

Manuel Castro Cosío tuvo pleno conocimiento del requerimiento que le estaba realizando esta autoridad fiscalizadora y no presentó contestación al respecto.

En la misma fecha, se requirió a Facebook Inc., para que brindara información sobre gastos realizados respecto a las ligas electrónicas que se enlistan a continuación:

| ID. | Hallazgo | Información del hallazgo. |
|-----|---|---|
| 1 |  | https://www.facebook.com/ads/library/?id=738908040371299 |
| 2 |  | https://www.facebook.com/ads/library/?id=768707440665764 |
| 3 | | https://www.facebook.com/ads/library/?id=211882200672638 |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | |
|---|---|---|
| |  | |
| 4 |  | https://www.facebook.com/ads/library/?id=200695495084003 |
| 5 |  | https://www.facebook.com/radioformulalapaz/videos/736952120572069/?_tn_=%2CO-R |

| | | |
|---|--|---|
| 6 |  | https://www.facebook.com/watch/?v=409403630334908 |
|---|--|---|

Sobre el particular, Facebook Inc. brindó respuesta al requerimiento el once de julio del año curso, por medio del cual remitió la siguiente información:

- Rango de fechas activo para la campaña publicitaria;
- El nombre del creador de la cuenta de pago registrada asociada a la campaña publicitaria;
- Todos los métodos de pago asociados a la cuenta de pago registrada asociada a la campaña publicitaria, los cuales contienen (en caso de estar disponibles) tipo de tarjeta de crédito (e.g., Visa, MasterCard, etc.), número de identificación del emisor o del banco, los últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito y el correo electrónico de la cuenta de PayPal.
- Gasto total para la campaña publicitaria, incluido el tipo de moneda.

Para una mejor comprensión sobre los gastos reportados por Facebook Inc., en el escrito de contestación, se realizaron las siguientes tablas:

| Pagos encontrados en el ID 1 referente al link: ads:https://www.facebook.com/ads/library/?id=738908040371299 | | | |
|---|--|-------------------|--------------|
| Fecha y hora de inicio de facturación | Fecha y hora de término de facturación | ID de Referencia | Monto pagado |
| 2020-12-20 20:21:32 | 2021-01-02 05:00:35 | 23846209190350518 | \$8,583.75 |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2020-12-29 06:00:00 | 2021-01-03 02:03:06 | L3N8TY27P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-28 06:00:00 | 2020-12-30 21:27:53 | 46SGKZJ7P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-28 15:30:00 | 2020-12-30 03:50:55 | CC93MYS6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-27 06:00:00 | 2020-12-29 15:52:08 | 29QHLYS6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-27 06:00:00 | 2020-12-29 15:52:08 | S8QHLYS6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-26 06:00:00 | 2020-12-28 20:23:36 | YC5EXYJ6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-26 06:00:00 | 2020-12-28 20:23:36 | WC5EXYJ6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-26 06:00:00 | 2020-12-28 01:17:47 | MZR3K377P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-26 06:00:00 | 2020-12-28 01:17:47 | HZR3K377P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-25 20:30:00 | 2020-12-27 07:48:05 | KJ8YJYW6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-24 06:00:00 | 2020-12-26 20:19:02 | 5D9GVYE7P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-24 13:30:00 | 2020-12-26 02:53:16 | LAG4PYE6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-23 06:00:00 | 2020-12-25 12:55:50 | 6HTWHYW6P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-22 06:00:00 | 2020-12-24 20:18:12 | UXF7MY27P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-22 06:00:00 | 2020-12-24 20:18:12 | TXF7MY27P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-21 06:00:00 | 2020-12-23 17:31:47 | MH6MEZJ7P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-19 06:00:00 | 2020-12-22 05:59:59 | DP857ZA7P2 | \$17,252.86 |
| 2020-12-19 06:00:00 | 2020-12-21 12:36:36 | X8E9FYW6P2 | \$15,026.53 |
| 2020-12-19 06:00:00 | 2020-12-21 12:36:36 | U8E9FYW6P2 | \$15,026.53 |
| 2020-12-19 06:00:00 | 2020-12-21 12:36:36 | AGWXEYW6P2 | \$15,026.53 |
| 2020-12-19 06:00:00 | 2020-12-21 12:36:36 | 49VKE377P2 | \$15,000.00 |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|
| 2020-12-19 06:00:00 | 2020-12-21 12:36:36 | Z8VKE377P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-20 01:30:00 | 2020-12-21 04:07:38 | 9MADE377P2 | \$15,000.00 |
| 2020-12-20 01:30:00 | 2020-12-21 04:07:38 | 7MADE377P2 | \$15,000.00 |
| Pagos encontrados en el ID 2 referente al link: ads:https://www.facebook.com/ads/library/?id=768707440665764 | | | |
| Fecha y hora de inicio de facturación | Fecha y hora de término de facturación | ID de Referencia | Monto pagado |
| 2021-01-24 06:01:45 | 2021-01-30 16:00:47 | 23846478542500518 | \$5,441.22 |
| 2021-01-30 06:00:00 | 2021-01-31 06:28:49 | A9X462B7P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-28 13:30:00 | 2021-01-30 09:00:58 | SMN5DZW6P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-28 13:30:00 | 2021-01-30 09:00:58 | SRJPC2K7P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-28 04:30:00 | 2021-01-29 23:48:58 | 4LPRGZ27P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-28 04:30:00 | 2021-01-29 23:48:58 | TAHTPZE7P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-27 04:00:00 | 2021-01-29 05:59:59 | HDQCJZE6P2 | \$70,290.54 |
| 2021-01-27 04:00:00 | 2021-01-29 05:59:59 | MHBLCZW6P2 | \$70,290.54 |
| 2021-01-27 04:00:00 | 2021-01-29 05:59:59 | U5ZDGZ27P2 | \$70,290.54 |
| 2021-01-27 04:00:00 | 2021-01-29 05:59:59 | 5GN8JZE6P2 | \$70,290.54 |
| 2021-01-27 04:00:00 | 2021-01-29 05:23:54 | 9CSM42B7P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-27 04:00:00 | 2021-01-29 05:23:50 | UT3AC477P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-25 06:00:00 | 2021-01-28 13:49:56 | F2VB8ZN6P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-25 06:00:00 | 2021-01-28 13:49:56 | N2K642B7P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-24 06:00:00 | 2021-01-27 01:19:40 | SY8LA477P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-24 06:00:00 | 2021-01-27 01:19:40 | 3MX9BZS6P2 | \$70,000.00 |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2021-01-24 06:00:00 | 2021-01-25 18:57:40 | 5FQNBZ27P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-24 06:00:00 | 2021-01-25 18:57:40 | 4FQNBZ27P2 | \$70,000.00 |

| Pagos encontrados en el ID 03 referente al link: ads:https://www.facebook.com/ads/library/?id=211882200672638 | | | |
|--|--|-------------------|--------------|
| Fecha y hora de inicio de facturación | Fecha y hora de término de facturación | ID de Referencia | Monto pagado |
| 2021-01-21 19:09:19 | 2021-01-23 17:45:21 | 23846478542500518 | \$1,428.89 |
| 2021-01-23 06:00:00 | 2021-01-23 08:00:00 | TVRKAZ27P2 | \$43,378.63 |
| 2021-01-22 06:00:00 | 2021-01-23 06:57:11 | 52Q8KZJ6P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-22 06:00:00 | 2021-01-23 06:57:11 | XZP8KZJ6P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-22 06:00:00 | 2021-01-22 13:21:11 | QVCLJZJ6P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-22 06:00:00 | 2021-01-22 13:21:11 | PVCLJZJ6P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-21 06:00:00 | 2021-01-22 06:49:18 | 8ASD9Z27P2 | \$70,000.00 |
| 2021-01-21 06:00:00 | 2021-01-22 06:49:18 | 3ASD9Z27P2 | \$70,000.00 |

| Pagos encontrados en el ID 04 referente al link: ads:https://www.facebook.com/ads/library/?id=200695495084003 | | | |
|--|--|------------------|--------------|
| Fecha y hora de inicio de facturación | Fecha y hora de término de facturación | ID de Referencia | Monto pagado |
| 2021-01-17 13:33:58 | 2021-01-19 18:00:21 | 6244750457151 | \$20,000.00 |
| 2021-01-18 18:00:00 | 2021-01-20 02:46:36 | DAZUVZNR2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-18 18:00:00 | 2021-01-20 02:46:36 | 7AZUVZNR2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-18 16:30:00 | 2021-01-19 17:40:54 | JK4DUZESM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-18 16:30:00 | 2021-01-19 17:40:54 | GK4DUZESM2 | \$10,000.00 |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2021-01-18 15:30:00 | 2021-01-19 16:37:52 | DL9D8Z2SM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-18 15:30:00 | 2021-01-19 16:37:52 | BL9D8Z2SM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-18 13:00:00 | 2021-01-19 15:32:50 | CAHEB4XRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-18 13:00:00 | 2021-01-19 15:32:50 | LWX8XZJSM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 06:00:00 | 2021-01-19 05:59:59 | JRJ4UZESM2 | \$11,617.75 |
| 2021-01-17 06:00:00 | 2021-01-19 05:59:59 | CRJ4UZESM2 | \$11,617.75 |
| 2021-01-17 21:30:00 | 2021-01-19 01:59:25 | 6RLXA4XRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 21:30:00 | 2021-01-19 01:59:25 | VQLXA4XRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 18:00:00 | 2021-01-18 21:21:13 | 3AMPA4XRM2 | \$10,015.86 |
| 2021-01-17 18:00:00 | 2021-01-18 21:21:13 | C74LUZNRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 18:00:00 | 2021-01-18 21:21:13 | X64LUZNRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 14:00:00 | 2021-01-18 17:36:44 | CRUF7Z2SM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 14:00:00 | 2021-01-18 17:36:44 | EQUF7Z2SM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-16 06:00:00 | 2021-01-18 13:41:32 | 8C88TZESM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-16 06:00:00 | 2021-01-18 13:41:32 | 7C88TZESM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 02:00:00 | 2021-01-18 04:56:39 | LP65UZNRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-17 02:00:00 | 2021-01-18 04:56:39 | BP65UZNRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-18 02:00:00 | 2021-01-18 02:00:06 | 243XVZJSM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-16 23:00:00 | 2021-01-18 02:00:00 | U33XVZJSM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-16 18:30:00 | 2021-01-17 22:41:17 | J32Y6Z2SM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-16 18:30:00 | 2021-01-17 22:41:17 | G32Y6Z2SM2 | \$10,000.00 |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 2021-01-15 06:00:00 | 2021-01-17 18:34:57 | KAFVTZNRM2 | \$10,000.00 |
| 2021-01-15 06:00:00 | 2021-01-17 18:34:57 | GAFVTZNRM2 | \$10,000.00 |

Por otro lado, en esta misma fecha, se realizó una solicitud de información a Twitter International Company, respecto si fueron pagadas, en su caso, cuánta pauta hay, el periodo en el que se pagó, que indicara el monto del pago, la modalidad en que cada pago fue realizado y el nombre del administrador de cada una de las siguientes URL's:

| Publicaciones en Twitter: Víctor Manuel Castro Cosío ("VictorCastroCos") | | |
|--|---|---------------|
| ID | Liga | Fecha |
| 1 | https://twitter.com/VictorCastroCos/status/1350609156512903168?s=20 | 16-enero-2021 |
| 2 | https://twitter.com/VictorCastroCos/status/1352629293436682243?s=20 | 22-enero-2021 |
| 3 | https://twitter.com/VictorCastroCos/status/1354930466818650113?s=20 | 28-enero-2021 |

| Publicaciones en Twitter: Oscar Mario Beteta("Mario Beteta") | | |
|--|---|---------------|
| ID | Liga | Fecha |
| 1 | https://twitter.com/MarioBeteta/status/1352626561543860224?s=20 | 22-enero-2021 |

Al respecto, Twitter International Company dio respuesta al requerimiento informando lo siguiente:

"Le informamos a esa H. Autoridad que Twitter Inc., es la entidad responsable para proporcionarle aclaraciones sobre el presente tema. Nos complace atender sus preguntas sobre estos asuntos de forma voluntaria, sin perjuicio de nuestra posición sobre la jurisdicción y la ley aplicable en este caso. Agradecemos al INE por mantener la información contenida en esta respuesta estrictamente confidencial.

La política de Twitter es responder con prontitud a las solicitudes que se emiten correctamente a través de un tratado de asistencia legal mutua ("MLAT") o cartas rogatorias, que garanticen el debido proceso. Tenga en cuenta que los registros que producimos son auto-autenticados. Además, los registros están firmados electrónicamente para garantizar su integridad en el momento de la elaboración. Si necesita una respuesta o declaración formal por escrito por favor indíquelo en su envío.

Twitter almacena diferentes tipos de información durante diferentes periodos de tiempo, de acuerdo con nuestros Términos de Servicio y Política de Privacidad. Parte de la información que almacenamos se recopila automáticamente, mientras que otra información se proporciona a discreción del usuario. Aunque almacenamos esta información, no podemos garantizar su veracidad. Por ejemplo, el usuario puede haber creado un perfil falso o anónimo. Para verificar estas cuentas, Twitter lo hace a través de un correo electrónico o número de teléfono móvil válido. Asimismo, para su mejor referencia, le informo que la política de cuentas verificadas de Twitter es información pública, misma que puede consultarse en cualquier momento al encontrarse disponible en: <https://help.twitter.com/es/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts>.”

Posteriormente, el siete de julio de dos mil veintiuno se solicitó la Dirección Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros para que informara sobre la detección de actividad contable de los denunciados en el periodo de precampaña. Derivado de lo anterior, la Dirección de Auditoría informó lo siguiente:

“(…)

Sobre el particular le informo que, los partidos políticos Morena y Partido del Trabajo, no registraron como precandidato al C. Víctor Manuel Castro Cosío, como puede constar en el Sistema Nacional de Precandidatos y Candidatos (SNR) y, por lo tanto, esta Unidad Técnica no generó un ID de contabilidad, para el referido, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), para el registro de sus ingresos y gastos, así como para la presentación del informe correspondiente.

No obstante, la Dirección de Auditoría dio seguimiento a los actos de precampaña de personas no registradas a fin de requerir a los sujetos obligados el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas. De lo anterior, se desprende que, de los procedimientos de fiscalización (monitoreos en internet, en la vía pública, en medios impresos y las visitas de verificación a eventos y casas de campaña) no se detectaron hechos o gastos que promovieran y/o posicionaran la imagen, nombre o plataforma, en el periodo de precampaña, del después candidato a la gubernatura en el estado de Baja California Sur, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur, en el Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021.

Por lo tanto, no se notificaron observaciones, mediante oficio de errores y omisiones, ni otro medio, a los partidos políticos integrantes de la coalición, así como tampoco a otros partidos políticos, relacionados con actos de precampaña, ni respecto de la presentación del informe del C. Víctor Manuel Castro Cosío, en el estado de Baja California Sur, consecuentemente tampoco

*hubo impacto en conclusión alguna dentro del Dictamen Consolidado correspondiente al periodo de precampaña.
(...)”*

De igual forma, se realizó una razón y constancia de la convocatoria al proceso interno de selección, que se llevó a cabo por el partido político Morena. Asimismo, se realizó un razón y constancia de la búsqueda exhaustiva en la red social Facebook del C. Víctor Manuel Castro Cosío para obtener muestras que llevó a cabo propaganda electoral, llamamiento al voto o si hizo público su posicionamiento como precandidato o Coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur.

Al respecto, en dicha búsqueda de la red social mencionada realizada del veintitrés de diciembre del dos mil veinte al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, si bien no se encontraron publicaciones haciendo un llamamiento expreso al voto, sí se localizaron diversas publicaciones con la siguiente leyenda: “Coordinador para la Defensa de la 4T en BCS”, mismo que el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur identificó con la figura de precandidato.

Una vez realizadas las diligencias que esta autoridad fiscalizadora consideró pertinentes, el catorce de julio de dos mil veintiuno, se acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a los quejosos y a los sujetos denunciados para que formularan. Al respecto, el partido político Morena remitió su escrito de alegatos, del cual se puede destacar lo siguiente:

- *El expediente SUP-RAP-66-2018 y su acumulado, de ninguna manera podría pretender ser utilizado para asignarle la carga de la prueba a mi representado a efectos de que proporcione registro, póliza, factura, anexo o alguna otra documentación para demostrar que dichos recursos han sido reportados ante el Sistema Integral de Fiscalización, toda vez que el caso concreto no se enmarca en la etapa de errores y omisiones, sino dentro de un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización.*
- *El C. Víctor Manuel Castro Cosío resultó triunfador en el presente Proceso Electoral 2020-2021, obteniendo un total de 125,736 votos, en tanto el segundo lugar obtuvo un total de 109,124 votos, existiendo una diferencia de 16,612, ello de conformidad con lo esgrimido por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Por lo tanto, al existir una clara diferencia de más del 5%, es evidente que la carga de la prueba forzosamente le corresponde a quien ha interpuesto el escrito de queja.*

- *Resulta incongruente e inaceptable que esta autoridad pretenda que se revierta la carga de la prueba y asignarle la calidad de "sujeto obligado" al C. Víctor Manuel Castro Cosío de manera ilegal, imponiéndole, a todas luces, una carga desproporcionada que claramente lo perjudicaría e incluso su derecho fundamental a la presunción de inocencia.*
- *En el desahogo del requerimiento formulado a mi representado, se acreditó que no hubo precampaña en morena dentro del Proceso Electoral del cual deriva la queja en que se actúa, por lo que no existió la obligación de llevar a cabo la contabilidad de dicha etapa, pues nadie está obligado a lo imposible.*

Por lo tanto, de la concatenación del marco conceptual expuesto en los párrafos anteriores y los hechos acreditados en la integración del procedimiento de mérito, es dable sostener que el ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío, fue registrado al proceso de selección interna aludido, cuyo carácter se entiende que fue el de precandidato a la Gubernatura del estado de Baja California Sur, en términos de lo dicho por el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, consecuentemente tenía la obligación de presentar su informe de precampaña, toda vez que fue el propio partido quien le permitió contender formalmente en el proceso de selección interna.

En ese sentido, el C. Víctor Manuel Castro Cosío obtuvo la calidad de precandidato al momento de realizar actividades con la finalidad de posicionarse frente a militantes o simpatizantes de la colación Juntos Haremos Historia en Baja California Sur integrada por el partido político Morena y del Trabajo, y tenía la obligación de presentar el informe de precampaña, toda vez que fue el propio partido quien les permitió realizar dichas manifestaciones; de esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del método de contienda interna. Por tanto, es evidente que el partido político Morena **tenía la obligación de registrar a su precandidato contendientes en el proceso de selección interna** aludido, a efecto que fueran sujetos a los procedimientos de fiscalización, pues sólo así es posible garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos, asimismo se advierte que dicha obligación se comparte con las y los precandidatos, pues estos también se encargan de informar en un primer momento al partido político y posteriormente estos a la autoridad fiscalizadora.

Así de los elementos de prueba que obran en el expediente es posible sostener que se detectaron actos que permiten a este Consejo General arribar a la conclusión que en efecto se trata de actividades de precampaña por parte de las personas incoadas.

Ahora bien, es importante para acreditar la existencia de actos de precampaña, lo procedente es analizar si los elementos obtenidos y detallados en las ligas electrónicas que se requirieron a Facebook Inc. cumplen con todos y cada uno de los elementos siguientes:

- a) **Un elemento personal:** que los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes o precandidatos(as) y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda.
- b) **Un elemento temporal:** que dichos actos o frases se realicen durante la etapa procesal de precampaña.
- c) **Un elemento subjetivo:** En este caso, recientemente la Sala Superior estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral.

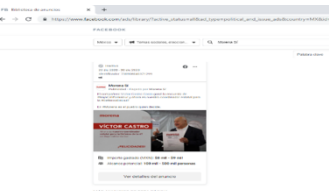
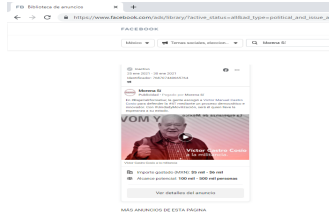
Lo anterior, en concatenación con lo dispuesto por el artículo 211, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra establece:

“Artículo 211.

*1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.
(...)”*

| | | | | |
|----|-----------|----------|----------|-----------|
| No | Ciudadano | Personal | Temporal | Subjetivo |
|----|-----------|----------|----------|-----------|

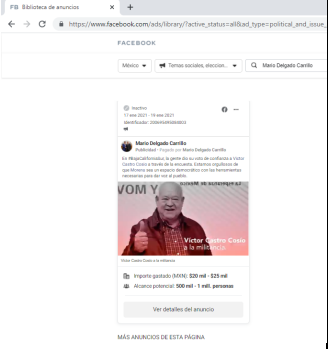
Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Víctor Manuel Castro Cosío | <p>Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Víctor Manuel Castro Cosío, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente identificable. Es pertinente señalar que el Tribunal Electoral de Baja California Sur señaló que el mencionado ciudadano tenía el carácter de precandidato.</p>  | <p>Se acredita, la imagen fue publicada y difundida en redes sociales durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020, esto es durante el periodo de precampañas, en relación con el Acuerdo INE/CG519/2020 por medio del cual se aprobaron los plazos para la fiscalización de los informes y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021. Específicamente del 23 al 30 de diciembre de 2020.</p> | <p>Se acredita, en virtud de que, de la citada publicación se advierte de manera objetiva el posicionamiento del C. Víctor Manuel Castro Cosío, debido a que en la descripción de la imagen hacen mención de que el C. Víctor Manuel Castro Cosío <i>“ganó la encuesta de #BajaCaliforniaSur y ahora es nuestro coordinador estatal para la #DefensaDeLa4T”</i>, con lo cual se puede inferir que el partido político Morena, realizó un Proceso Interno de Selección del cual el denunciado resultó ganador. Asimismo, se puede observar que lo nombran Coordinador Estatal para la Defensa de la 4T, posición que el Tribunal Electoral de Baja California calificó como sinónimo de precandidato por el partido Morena.</p> |
| 2 | Víctor Manuel Castro Cosío | <p>Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Víctor Manuel Castro Cosío, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente identificable. Es pertinente señalar que el Tribunal Electoral de Baja California Sur señaló que el mencionado ciudadano tenía el carácter de precandidato.</p>  | <p>Se acredita, las imágenes fueron publicadas y difundidas en redes sociales durante el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2021 al 30 de enero de 2021, esto es durante el periodo de precampañas, en relación con el Acuerdo INE/CG519/2020 por medio del cual se aprobaron los plazos para la fiscalización de los informes y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021.</p> | <p>Se acredita, en virtud de que, de la citada publicación se advierte de manera objetiva el posicionamiento del C. Víctor Manuel Castro Cosío, ya que en el video de la publicación se aprecia al otrora candidato mencionar <i>“que la gente decida”</i>, aunado a lo anterior, en la descripción de la imagen se observa: <i>“En #BajaCaliforniaSur, la gente escogió a Víctor Manuel Castro Cosío para defender la #4T mediante un proceso democrático e innovador.”</i> Por lo anterior, se puede concluir que medió un Proceso Interno de Selección para elegir al C. Víctor Manuel Castro Cosío como precandidato del partido político Morena. De igual forma, durante el video, se puede advertir un recuadro el cual contiene el nombre del denunciado y debajo el puesto <i>“Coordinador estatal para la defensa de la 4T en Baja California Sur”</i>, por lo que es</p> |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | | dable concluir que se está ostentando como precandidato según el criterio del Tribunal Estatal mencionado con anterioridad. |
| 3 | Víctor Manuel Castro Cosío | <p>Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Víctor Manuel Castro Cosío, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente identificable. Es pertinente señalar que el Tribunal Electoral de Baja California Sur señaló que el mencionadao ciudadano tenía el carácter de precandidato.</p>  | <p>Se acredita, las imágenes fueron publicadas y difundidas en redes sociales durante el periodo comprendido entre el 21 de enero de 2021 al 23 de enero de 2021, esto es durante el periodo de precampañas, en relación con el Acuerdo INE/CG519/2020 por medio del cual se aprobaron los plazos para la fiscalización de los informes y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021.</p> | <p>Se acredita, en virtud de que, de la citada publicación se advierte de manera objetiva el posicionamiento del C. Víctor Manuel Castro Cosío, ya que en el video de la publicación se aprecia al otrora candidato mencionar <i>“que la gente decida”</i>, aunado a lo anterior, en la descripción de la imagen se observa: <i>“En #BajaCaliforniaSur, la gente escogió a Víctor Manuel Castro Cosío para defender la #4T mediante un proceso democrático e innovador.”</i> Por lo anterior, se puede concluir que medió un Proceso Interno de Selección para elegir al C. Víctor Manuel Castro Cosío como precandidato del partido político Morena. De igual forma, durante el video, se puede advertir un recuadro el cual contiene el nombre del denunciado y debajo el puesto <i>“Coordinador estatal para la defensa de la 4T en Baja California Sur”</i>, por lo que es dable concluir que se está ostentando como precandidato según el criterio del Tribunal Estatal mencionado con anterioridad.</p> |
| 4 | Víctor Manuel Castro Cosío | <p>Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Víctor Manuel Castro Cosío, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente identificable.</p> | <p>Se acredita, las imágenes fueron publicadas y difundidas en redes sociales durante el periodo comprendido entre el 17 de enero de 2021 al 19 de enero de 2021, esto es durante el periodo de precampañas, en relación con el Acuerdo INE/CG519/2020 por medio del cual se aprobaron los plazos para la fiscalización de los informes y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso</p> | <p>Se acredita, en virtud de que, de la citada publicación se advierte de manera objetiva el posicionamiento del C. Víctor Manuel Castro Cosío, ya que en el video de la publicación se aprecia al otrora candidato mencionar <i>“que la gente decida”</i>, aunado a lo anterior, en la descripción de la imagen se observa: <i>“En #BajaCaliforniaSur, la gente escogió a Víctor Manuel Castro Cosío para defender la #4T mediante un proceso</i></p> |

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | |  | <p>Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021.</p> | <p><i>democrático e innovador.</i>"</p> <p>Por lo anterior, se puede concluir que medió un Proceso Interno de Selección para elegir al C. Víctor Manuel Castro Cosío como precandidato del partido político Morena.</p> <p>De igual forma, durante el video, se puede advertir un recuadro el cual contiene el nombre del denunciado y debajo el puesto "Coordinador estatal para la defensa de la 4T en Baja California Sur", por lo que es dable concluir que se está ostentando como precandidato según el criterio del Tribunal Estatal mencionado con anterioridad.</p> |
|--|--|---|--|--|

Al respecto, es importante mencionar que los hallazgos de esta autoridad se verificaron durante el periodo de precampaña de Baja California Sur siendo este del veintitrés de diciembre del dos mil veinte al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.

En este sentido, ha quedado acreditado la realización de propaganda de precampaña, que necesariamente implicaron el flujo de recursos para su realización, por lo que como se ha señalado previamente, si un precandidato(a) realiza una erogación que se considere gasto de precampaña, deberá reportarlo en el informe de precampaña correspondiente.

En el caso en concreto, se desprende que el partido político Morena y/o la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur, omitió registrar como precandidato al C. Víctor Manuel Castro Cosío que participó en el proceso de selección interna para contender al cargo Gobernador de Baja California Sur en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 en el estado de Baja California Sur, aun cuando el instituto político y el ciudadano incoado no reconocen que fue precandidato y que efectuó actos considerados de precampaña, en consecuencia se generó la obligación de presentar los informes de precampaña que nos ocupan.

Como se expuso en párrafos precedentes, la obligación de presentar los informes de precampaña se genera a las personas que participan en sus procesos internos de selección a cargos de elección popular, en el caso que nos atañe las personas que obtuvieron el carácter de precandidatos, ya que como se ha sostenido en la

presente Resolución, tal calidad atiende a la naturaleza del propósito, esto es, ser postulado por el partido político como candidato a un cargo de elección popular.

De lo anterior se sigue que la autoridad fiscalizadora tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos(as) y candidatos(as) en todo tiempo, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus recursos. Lo anterior, se vigoriza con la afirmación por parte de los sujetos de haber llevaron a cabo actos de precampaña, toda vez que existe el deber de reportar que hubo ingresos y/o gastos, para lo cual es menester presentar el informe de precampaña respectivo.

En ese sentido, al omitir informar a esta autoridad de la probable precandidatura, impidió que se desplegaran las facultades de fiscalización, así como que se ordenaran procedimientos o la aplicación de diversos mecanismos para el control y vigilancia del origen, monto, destino y aplicación de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos.

En ese sentido, sirve de criterio orientador lo señalado por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al emitir la sentencia en el expediente identificado con el número SM-JDC-65/2017 y acumulado SM-JDC-66/2017 y determinar lo siguiente:

*“(...) esta Sala advierte que la autoridad da a conocer al aquí actor, que **el partido político que lo postuló estuvo en posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para registrarlo como precandidato y, en consecuencia, que pudiera informar sobre sus ingresos y gastos vía el SIF. Gastos de propaganda que, además, le mencionó había detectado, como se evidencia del siguiente párrafo extraído del oficio al que nos referimos antes, en el cual se indica textualmente: (...)***

Efectivamente, se tiene que si bien por un lado el partido que lo propone dice que fue candidato único y que no hizo precampaña, también se aprecia de autos que el actor tuvo tal carácter, como lo hace patente la constancia de precandidatura expedida por el Presidente del Consejo Político y por el Presidente del Comité Estatal del Partido Joven, y él mismo reconoce que sí realizó actos de precampaña, en su oficio de respuesta a la autoridad.

*De ese oficio debe destacarse que, en unión al diverso oficio de requerimiento de la autoridad, permiten concluir que no pudo en efecto acceder el SIF, **y ello obedeció a un acto atribuible al partido**, como fue reconocido por la Unidad*

*de Fiscalización, en la medida en que expone que le dio esa opción en el oficio de errores y omisiones y el partido tomó una posición pasiva, **al dejar transcurrir el plazo que le fue dado para pedir la habilitación del precandidato en el SNR y el SIF.***
(...)”

[énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que es obligación del partido político realizar las acciones conducentes para registrar a las y los precandidatos en el SIF y en el SNR para el efecto de rendir sus respectivos informes de ingresos y gastos de precampaña.

Así, una vez registrados como aspirantes, el partido político debió informar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California Sur, la acreditación de ellos y, lo siguiente: I. Relación de los aspirantes o precandidatos(as) acreditados y cargo por el que compiten; II. Fecha de Inicio y conclusión de actividades de precampaña; y III. Calendario de actividades oficiales de precampaña.

En este sentido, el Organismo Público Local estaría en posibilidades de dar al partido político la cuenta de usuario y contraseña⁷ del SNR, con la finalidad de que éste llevara a cabo el registro de la información de sus precandidatos(as).⁸

Esto es, que una vez que el precandidato(a) fuera registrado por el partido político y que como tal fuera validado en el SNR, se iniciaría con la contabilidad en el SIF, toda vez que se enviaría la responsiva del usuario y contraseña de este último, así como su acceso al sistema de notificaciones electrónicas.

Lo anterior, para que el partido político estuviera en posibilidad de generar y presentar los informes de precampaña en el SIF en los cuales debía incluir **la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de sus precandidatos**, desde que éstos son registrados como tales hasta la postulación del candidato ganador correspondiente y en los casos de candidato único, desde el reconocimiento del partido hasta la postulación.

Aún y cuando se ostenten como aspirantes o nieguen haber tenido el carácter de precandidatos(as), se subrogaron a todo el procedimiento de precampaña

⁷ Artículo 270, numeral 4 Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

⁸ Artículo 267 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

establecido en la normatividad de la materia, adquiriendo los derechos y obligaciones que ello conlleva.

Ahora bien, resulta necesario realizar las precisiones siguientes:

- La obligación de los partidos políticos consiste en presentar los informes de ingresos y gastos de precampaña dentro de los plazos que la propia norma establece, es decir, a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas (de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos).
- La naturaleza de la obligación de reportar y presentar la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y gastos efectuados durante el periodo de precampaña, genera que la omisión en el cumplimiento per se no sea una falta subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no presenta la documentación dentro de los plazos específicos, queda configurada la infracción.
- Resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos, a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Es por ello que el reporte de los ingresos y gastos en el tiempo establecido para ello resulta esencial para dotar de certeza al ejercicio de la autoridad fiscalizadora.

En este tenor, permitir que los sujetos presenten información en cualquier momento, vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los dictámenes y resoluciones. Por ello, los plazos referidos son de aplicación estricta en cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta la notificación del oficio de errores y omisiones; así como de la respuesta recaída a los mismos, con lo que se garantiza a los partidos políticos y sus precandidatos(as) la debida audiencia. Esto resulta de tal relevancia, que el procedimiento al rubro indicado fue instaurado precisamente con la finalidad de salvaguardar el debido proceso en favor de la persona incoada y el Partido Morena.

Al respecto, en el procedimiento de fiscalización a las precampañas se tutela la garantía de audiencia de los sujetos obligados mediante la notificación del oficio de errores y omisiones, siendo la respuesta que formulen al mismo el momento

procesal oportuno para realizar las manifestaciones que consideren pertinentes y, en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

Ahora bien, en el marco de la sustanciación de un procedimiento sancionador dicha garantía de audiencia se verifica en dos momentos procesales, al emplazar a los sujetos obligados y al informarles la apertura de la etapa de alegatos, ya que a través de dichas comunicaciones se instaura un dialogo procesal entre los incoados y la autoridad sustanciadora, lo que en el caso en concreto aconteció en las fechas detalladas en los antecedentes de la presente Resolución, como se muestra a continuación:

| No. | Sujeto | Fecha de notificación | Vencimiento del emplazamiento |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Partido Político Morena | 10 de junio del 2021 ⁹ | 15 de junio del 2021 |
| 2 | Víctor Manuel Castro Cosío | 10 de junio del 2021 | 15 de junio del 2021 |

Al respecto cabe señalar que tanto el Instituto Político como el ciudadano omitieron dar respuesta a los emplazamientos realizados por esta autoridad fiscalizadora.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, permite conocer qué partidos políticos y personas aspirantes a una candidatura se ajustaron a las disposiciones relativas al ingreso y gasto en materia electoral y, en su caso, las violaciones que hubieran cometido, dotando así el Proceso Electoral de legalidad, legitimidad y equidad en la contienda, valores fundamentales del estado constitucional democrático.

En razón de ello, considerando que el procedimiento de revisión de informes de precampaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados y, a la luz del principio de seguridad y certeza jurídica respecto de la actuación de la autoridad fiscalizadora, y de la integralidad que debe prevalecer en los procedimientos de revisión de informes, es que los argumentos esgrimidos por el ciudadano incoado y la documentación adjunta **no resultan válidos** para subsanar la omisión de presentar los informes de precampaña en el tiempo y forma establecidos por la norma electoral.

⁹ El oficio de notificación es de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.

Al respecto, robustece lo anterior lo sostenido por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JDC-416/2021 Y ACUMULADOS y SUP-RAP-74/2021, SUPJDC-424/2021 Y SUP-JDC-425/2021, ACUMULADOS, al señalar:

- Los requerimientos o prevenciones que devienen del Acuerdo CF/018/2020, solo son aplicables para los precandidatos que se encuentran registrados en el SIF; pues la obligación de la autoridad de requerir a los precandidatos el escrito de errores y omisiones surge después de que el partido lleve a cabo las acciones necesarias para registrar a sus precandidaturas a través del SNR.
- Es obligación de los partidos de registrar a las y los precandidatos en el sistema de fiscalización en línea es determinante para que, posteriormente, la autoridad pueda requerir a los sujetos obligados de presentar su informe de gastos en el procedimiento de revisión de informes.
- El responsable directo de subir al SIF los informes de ingresos y gastos de precampaña es el partido político; por su parte, los precandidatos tienen la obligación solidaria de cumplir con esta obligación, esto es, el régimen solidario de responsabilidad conlleva al partido político a ser el puente de comunicación entre la autoridad fiscalizadora y las personas precandidatas.
- La obligación se cumple una vez que el precandidato presenta el informe ante el partido político en el plazo en el que debe hacerlo y éste a su vez a la autoridad administrativa, con el fin de no retrasar la labor de la autoridad fiscalizadora y cumplir con los tiempos previstos en la ley.
- Los ciudadanos que pretendan ser postulados por un partido político como candidata o candidato a cargo de elección popular, deben ser considerados como precandidatos(as), con independencia de que obtengan del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatura.
- Un precandidato o precandidata es, en términos generales, una persona que pretende ser postulado por un partido político como candidato a algún cargo de elección popular, conforme a la ley y a la candidatura de un partido político, en el procedimiento de selección interna de precandidatura a cargos de elección popular, sin que tal calidad se limite, conforme a la ley, a algún procedimiento de selección en particular como lo alegan los promoventes.
- Para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, resulta irrelevante si se les denomina expresamente como precandidatos, aspirantes o participantes.
- Respecto de que no existió una etapa de precampaña denominada así por el partido de acuerdo con su procedimiento interno y, por lo tanto, desde la óptica

de los promoventes, no tuvieron que reportar gastos, la Sala ha precisado que la facultad fiscalizadora de la autoridad tiene por fin constatar el uso y destino real de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en todo tiempo, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus recursos; lo que implica que incluso en el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña existe el imperativo no solo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, ya que conlleva el deber de reportarle que no hubo ingresos y/o gastos, para lo cual es menester presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros.

- Los aspirantes, precandidatos y candidatos son sujetos de derechos y obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña, campaña y de cualquier acción que realicen dirigida a la promoción de su postulación.
- El cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los aspirantes, precandidatos y candidatos, son responsables solidarios respecto de la presentación de sus informes y del cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización.
- En la hipótesis no concedida de que no hubo una etapa de precampañas, los aspirantes o precandidatos no se encontraban exentos de presentar el informe de precampaña, porque, aun cuando no hubiesen tenido ingresos y egresos, tenían el deber de reportar a la autoridad fiscalizadora en ceros.
- La presentación de informe hecha una vez concluido los plazos para la revisión de los Informes y su documentación comprobatoria, lo que a todas luces hacía imposible su fiscalización, se entiende por no presentado el informe una vez que se haga inviable la revisión de los informes dentro de los tiempos establecidos en la ley para el adecuado y eficaz cumplimiento de la atribución de la autoridad,
- La omisión de rendir informes de precampaña atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización.

En este orden de ideas, el ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío sí tuvo el carácter de precandidato; por lo tanto, tenía la obligación en materia de fiscalización de entregar su informe de gastos de precampaña.

En primer lugar, porque como la Sala Superior lo ha sustentado las personas que pretendan ser postuladas por un partido político como candidata o candidato a un cargo de elección popular, deben ser consideradas como **precandidaturas**, con independencia de que obtuvieran, del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatura; en ese sentido, para el

cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, resulta irrelevante si se les denomina expresamente como precandidaturas, aspirantes o participantes. Cuestión que se robustece con lo dicho por el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, que calificó al C. Víctor Manuel Castro Cosío como precandidato a la guberantura del estado de Baja California Sur.

La no presentación de los informes de precampaña vulnera la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que impide la fiscalización de los recursos que fueron utilizados por los partidos políticos y por las y los precandidatos en la competencia interna para designación de sus candidatos a un cargo de elección popular.

En este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente las personas aspirantes, las precandidaturas y candidaturas, como lo precisó la autoridad fiscalizadora, son responsables solidarias respecto de la conducta en análisis.

Así, la omisión de rendir informes de precampaña atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización. En tanto, la presentación extemporánea de tales informes, que también constituyen una infracción a la normativa electoral, debe ser sancionada en la medida en que retarda el ejercicio de la facultad fiscalizadora.

Visto lo anterior y una vez valoradas las pruebas en conjunto respecto de los hechos materia del procedimiento, es viable concluir lo siguiente:

- El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur calificó al imputado como precandidato, con independencia de que obtuvieran, del órgano partidista facultado para ello algún tipo de registro con la denominación de precandidatura.
- El Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur acreditó que Víctor Manuel Castro Cosío es plenamente identificable como Coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, siendo que equiparó dicho nombramiento a la figura de precandidato de MORENA para la gubernatura del Estado.

- Que existen hallazgos suficientes que acreditan que los sujetos incoados realizaron actividades y gastos de precampaña y omitieron presentar los informes respectivos ante la autoridad electoral.

Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y su administración, se concluye que el **Partido Morena** omitió presentar el informe de precampaña relativos al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California Sur, del siguiente:

| ID | Ciudadano | Cargo |
|----|----------------------------|------------|
| 1 | Víctor Manuel Castro Cosío | Gobernador |

En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta autoridad electoral concluye que existen elementos que configuran una conducta infractora de lo establecido en 79, numeral 1, inciso a) fracciones I y III de Ley General de Partidos Políticos, por lo que el procedimiento de mérito debe declararse **fundado** respecto de los hechos analizados en el presente apartado.

2.3. Responsabilidad de los sujetos obligados.

Acreditada la conducta materia de análisis, es importante, determinar la responsabilidad del sujeto obligado, previo a la individualización de las sanciones correspondientes.

De la lectura a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende lo siguiente:

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;”

Podemos advertir que las y los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña, pues deben presentar ante el partido sus respectivos informes.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los precandidatos(as), el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS”, capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de la legislación en comento, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales.
 - b) Informe anual.
 - c) Informes mensuales.
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña.**
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano.
 - c) Informes de campaña.
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo.
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero.
 - c) Informe de Situación Presupuestal.

De lo anterior se desprende que, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; sino que ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es la o el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de las y los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
- Que las y los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos(as) son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos(as), partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, la o el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y las y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad en materia de fiscalización, ante las responsabilidades compartidas entre partido y precandidato(a), a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por

cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos y precandidatos(as) a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo las y los precandidatos obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos; cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los precandidatos, lo anterior ya que estos deben presentar en un primer momento su informe de ingresos y gastos ante el partido político, para que este tenga la información y documentación idónea para cumplir con su obligación ante la autoridad fiscalizadora.

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que, de actualizarse dicho supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los precandidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del TEPJF, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandis, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de

observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación¹⁰:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Cuarta Época:

Recurso de apelación. [SUP-RAP-201/2009](#) y sus acumulados.—Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—5 de agosto de 2009.—Unanimidad de

¹⁰ El contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales interpretados en esta jurisprudencia, corresponden a los artículos 25, párrafo 1 y 55, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos; y 442, párrafo 1, incisos d) e i), 443, párrafo 1, inciso a), 447, párrafo, inciso b), y 452, párrafo, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.— Secretarios: Mauricio Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís.

Recurso de apelación. [SUP-RAP-198/2009](#).—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes.

Recurso de apelación. [SUP-RAP-220/2009](#) y sus acumulados. —Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, en la respuesta del partido no se aluden ni advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Ahora bien, por lo que hace a la responsabilidad de los precandidatos, estos deben acreditar el cumplimiento de su obligación consistente en presentar el informe respectivo ante el órgano interno del partido por el que pretenden ser postulados, de conformidad con el artículo 229, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que en caso de que esto se acredite la responsabilidad únicamente sería atribuible al partido político y no a las personas que pretenden obtener una candidatura.

Lo anterior, ha sido un criterio sostenido por el TEPJF con la emisión de la tesis LIX/2015, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

“Tesis LIX/2015

INFORMES DE PRECampaña. SU PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE EL PARTIDO EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD A PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS.- *De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracciones I a III, de la Ley General de Partidos Políticos; 229, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 235, 238, 239, 240 y 242 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se desprende el deber de los institutos políticos de presentar informes de precampaña de los ingresos y gastos de cada uno de sus precandidatas y precandidatos a cargos de elección popular, así como su responsabilidad solidaria en el cumplimiento de esa obligación. En este orden de ideas, cuando se acredita que éstos últimos presentaron en tiempo y forma el informe de gastos de precampaña correspondiente, ante el órgano competente del partido político en el cual militan y, no obstante ello, éste omite presentarlo ante la autoridad fiscalizadora mediante el sistema de contabilidad en línea, o bien, lo hace de manera extemporánea, la infracción a las normas que regulan dicha obligación, es atribuible sólo al partido político y no a quien ostenta una precandidatura, al actualizarse una excluyente de responsabilidad para tales personas obligadas, al ser producto de una omisión imputable exclusivamente al instituto político.”*

Lo cual en el caso concreto no aconteció, esto es, la persona incoada de la que ha quedado acreditado que realizaron actos de precampaña y de las cuales el Partido Morena omitió presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña, al ser emplazados en el procedimiento de mérito no presentaron evidencia alguna en la que se advierta que cumplieron con su obligación de presentar ante el órgano partidista correspondiente el informe de ingresos y gastos relacionados con la propaganda electoral detectada.

Esto es así, porque como lo ha sostenido la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JDC-416/2021 Y ACUMULADOS y SUP-RAP-74/2021, SUPJDC-424/2021 Y SUP-JDC-425/2021, ACUMULADOS, con base en el marco jurídico descrito se advierte, cuando menos, que existen tres hipótesis de irregularidades claramente diferenciables:

- i) Cuando el partido y el precandidato no cumplen sus respectivos deberes;
- ii) Cuando el precandidato no cumple su deber, pero el partido sí cumple el que le corresponde, y
- iii) Cuando el precandidato sí cumple su deber, pero el partido o coalición no cumple la que el corresponde.

Con base en lo anterior, la Sala Superior ha considerado que:

“La responsabilidad solidaria a que se refiere el sistema electoral mexicano no guarda similitud con la responsabilidad solidaria prevista en el derecho civil, al abordar, por ejemplo, las obligaciones que derivan de los actos ilícitos; o de carácter laboral o seguridad social; o, incluso de índole fiscal; en las que se puede apreciar, como rasgo común, que los obligados serán solidariamente responsables por los daños o prestaciones reclamadas, de modo que, bajo la aparente aplicabilidad de los conceptos del derecho civil, pudiera erróneamente considerarse suficiente la atribución de responsabilidad a los partidos políticos por las irregularidades detectadas con motivo de la revisión de los informes de campaña, eximiendo a los candidatos de cualquier responsabilidad o sanción”.¹¹

En tales condiciones mientras que en materia civil, el alcance de los obligados solidarios está concebido en el concepto de mancomunidad, la pluralidad de deudores y de exigir solo a uno de éstos el cumplimiento total de la obligación, a pesar de la existencia de una obligación mancomunada; esto no puede ser así en materia electoral, pues del marco normativo se desprende que en cada caso debe valorarse el grado de responsabilidad del precandidato y del partido político en la conducta omisiva para determinar si la responsabilidad solidaria da lugar a la imposición de sanciones a solo uno de ellos o a ambos obligados solidarios.

Esto es, cada caso debe valorarse el grado de responsabilidad del precandidato y del partido político en la conducta omisiva para determinar si la responsabilidad solidaria da lugar a que a cada uno de los sujetos investigados se le imponga una sanción o solo a algunos de ellos.

Por lo que se refiere a las sanciones de los precandidatos y candidatos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos, su responsabilidad implica la observancia de determinadas obligaciones, consistentes principalmente en entregar a su partido político la documentación para acreditar los ingresos y los gastos durante esa etapa inicial; de tal forma que el deber de rendir los informes correspondientes ante la autoridad fiscalizadora corresponde a los partidos políticos.

En ese sentido, los precandidatos son responsables solamente del incumplimiento de su propio deber, por lo que la norma aplicable exige que las infracciones en que incurran sean analizadas de manera separada respecto de los partidos políticos.

¹¹ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos SUP-JDC-623/2021

Aunado a ello, la propia normativa dispone que la responsabilidad de los precandidatos y candidatos sea analizada de forma separada a la responsabilidad de los partidos políticos que los postulan, pues cada uno debe responder por las obligaciones específicas.

Asimismo, al ser conductas diferentes, tampoco se puede decir que las sanciones que se impongan necesariamente deben ser similares, toda vez que, como se ha constatado, el legislador dispuso que la conducta de los partidos políticos y de los precandidatos sea revisada de forma independiente y sancionada de acuerdo con las particularidades de cada uno de ellos.

Esto es así, porque el legislador dispuso que cada uno de estos sujetos (precandidatos por un lado y partidos políticos por el otro) tiene deberes distintos, de tal forma que su incumplimiento conlleva únicamente a la responsabilidad, en lo individual, del sujeto responsable, sin que sea dable sancionar a un sujeto distinto y sin que se pueda afirmarse que la sanción a uno de ellos excluye la responsabilidad del otro. En otras palabras, consentir lo anterior implicaría atribuir automáticamente una responsabilidad a quién no le corresponde o eximirlo de una que sí le es atribuible.

En ese contexto, la Sala Superior ha razonado que la calificación de las faltas tomando en cuenta los agravantes y atenuantes no puede realizarse de forma arbitraria o caprichosa, sino que debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto de comisión u omisión específico suceden, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en los que se sustenta.¹²

Es relevante no perder de vista que la omisión impidió que se desplegaran las facultades de fiscalización, así como que se ordenaran procedimiento o la ejecución de diversos mecanismos para el control y vigilancia del origen, monto, destino y aplicación de los recursos con que cuenten los partidos políticos, por lo que los precandidatos y el partido violaron la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos, pues impidieron conocer si se ajustaron a las disposiciones en materia de financiamiento y, en su caso, las violaciones que hubieran cometido, con lo que imposibilitó que se dotara al Proceso Electoral e legalidad, legitimidad y equidad en la contienda, valores fundamentales del estado constitucional democrático.

¹² Criterio sostenido al resolver el SUP-RAP-016/2001

Por lo anteriormente señalado, este órgano fiscalizador concluye que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, tanto al Partido Político Morena y/o la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Sur como el C. Víctor Manuel Castro Cosío, pues no presentó el informe de precampaña correspondiente en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California Sur, como lo establece la normatividad electoral.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a las individualizaciones de las sanciones correspondientes.

2.4. Individualización de la sanción y determinación de la sanción, respecto de la omisión de presentar el Informe de Precampaña precisados en el Considerando 2.2

Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el Considerando 2.2 de la presente Resolución, violatoria del artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos se procede a individualizar la sanción correspondiente, atenta a las particularidades que en el caso se presentan, y atendiendo al principio constitucional de proporcionalidad que deriva de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Federal.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con los criterios sostenidos por la Sala Superior del TEPJF dentro de las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados con número de expediente SUP-RAP-05/2010, SUP-RAP-74/2021 y ACUMULADOS, así como el SUP-JDC-416/2021 y ACUMULADOS.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

h) La capacidad económica del ente infractor

Por tanto, se advierte que la autoridad debe considerar las circunstancias particulares del caso e individualizar la sanción, tomando en cuenta diferentes parámetros con el fin de imponer una sanción proporcional.

En este orden de ideas y atendiendo al principio de interpretación conforme¹³, aplicar sanciones máximas implica valorar las circunstancias particulares del caso, así como las agravantes o atenuantes que pudieran existir en cada caso particular.

Por tanto, y atendiendo a una interpretación conforme, la Sala Superior tal como lo sostuvo en el SUP-RAP-74/2021 y acumulados, considera que esta autoridad electoral, tiene a su disposición el catálogo de sanciones que ofrece el artículo 456, párrafo 1, inciso c), fracciones I, II y III, en relación con lo dispuesto en los artículos 445, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto permite y obliga a analizar y valorar todos los elementos y circunstancias en las que se cometió la infracción, de forma que, si esta autoridad decide aplicar la sanción máxima, esto acontecerá bajo los más altos estándares de justificación y legitimación.

Aunado a lo anterior, como el Órgano Jurisdiccional ha sostenido la calificación de las faltas debe realizarse tomando en cuenta tomando las agravantes y atenuantes, esto es, no puede realizarse de forma arbitraria o caprichosa, sino que debe contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto de comisión u omisión específico suceden, así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en los que se sustenta.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción; considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, salvaguardando la función fiscalizadora.

En este sentido, el régimen de responsabilidad que se establece en el sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones, precandidatos y precandidatos, obliga a este Instituto, a que frente a cada irregularidad encontrada, determine al

¹³ La interpretación conforme es una obligación de los juzgadores, aplicable en los casos en que se esté en la presencia de una norma que resulte sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros del control de constitucional y convencionalidad.

sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas por cada uno de acuerdo a las circunstancias objetivas y subjetivas que irradian en la comisión de la irregularidad y, en consecuencia, individualizar las sanciones que correspondan a cada sujeto.

En consideración a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, por cuestión de metodología se analizará la infracción en la que incurrieron cada uno de los sujetos obligados atendiendo las características especiales de cada uno de ellos, para el C. Víctor Manuel Castro Cosío precandidato el apartado **A**, y por lo que hace al Partido Morena en el apartado **B**.

A. Por lo que hace a la imposición de la sanción a la precandidatura.

La precandidatura referida en el cuadro siguiente omitió presentar su informe de precampaña respectivo:

| Nombre | Cargo | Estado/ Municipio/ Distrito |
|----------------------------|------------|-----------------------------|
| Víctor Manuel Castro Cosío | Gobernador | Baja California Sur |

Por lo anterior, se analizará en un primer momento y en cumplimiento al criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF, se valorará la gravedad de las irregularidades cometidas por los precandidatos, considerando los aspectos siguientes:

- i. Falta de contestación por parte del precandidato incoado;
- ii. La naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan;
- iii. Las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que, en todo caso, se cometió la infracción.
- iv. Si hubo una intencionalidad y los medios de ejecución, valorando cuestiones como si se intentó encubrir la violación;
- v. El monto económico o beneficio involucrado; y
- vi. Su impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad.

En un segundo momento, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

Finalmente, se analizarán de forma concatenada los elementos para individualizar la sanción, respecto de cada una de las personas señaladas. Para el efecto de graduar correctamente la sanción, se valorará en cada caso, el tipo de gravedad de la violación atribuida a la precandidatura del estado de Baja California Sur; es decir, si esta fue ordinaria, especial o mayor, considerando los efectos de la gravedad en los bienes jurídicos tutelados como son la rendición de cuentas, la transparencia y la certeza en el ejercicio del gasto y la aplicación de los recursos durante el periodo de precampañas.

Es importante señalar que el análisis de proporcionalidad supone determinar si las sanciones se tratan de forma coherente, teniendo en consideración un orden o escala que garantice que los sujetos sean sancionados por faltas similares reciban sanciones de gravedad comparable y que las personas sancionadas por falta de distinta gravedad reciban sanciones acordes con la propia graduación del marco legal, así como que las sanciones que se apliquen estén en función de la gravedad de las infracciones.

Lo anterior es así, en virtud de que la punibilidad es la conminación de privación o restricción de bienes del autor de la infracción, formulada para la prevención general, y determinada cualitativamente por la clase del bien jurídico tutelado y cuantitativamente por la magnitud y lesión a este.

Consecuentemente, es necesario desde la dimensión cualitativa, atender los bienes tutelados y, desde la dimensión cuantitativa, tener en cuenta la magnitud del bien y la lesión a este.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta la necesidad y legitimidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al sufragio pasivo, de conformidad con los artículos 1º y 35, fracción II, de la Constitución Federal, de forma tal que las únicas restricciones sean objetivas, razonables y, por tanto, proporcionales.

En este orden de ideas, resulta necesario apartarse de una interpretación de las disposiciones legales en estudio que dé como resultado una lectura desproporcionada y, en cambio, tomar una interpretación que otorgue una protección más amplia al derecho humano fundamental al sufragio pasivo frente a las obligaciones derivadas del sistema de fiscalización y, en particular, de las obligaciones de los partidos y de los precandidatos de rendir cuentas.

Cabe señalar que estas obligaciones derivan del mandato constitucional de vigilar el origen y el destino de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos.

Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el Considerando 2.2 de la presente Resolución, violatoria del artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En este sentido, lo procedente es analizar los aspectos mínimos precisados en la sentencia SUP-JDC-416/2021 y sus acumulados, de conformidad con lo siguiente:

i. Falta de contestación por parte del precandidato incoado.

Previo al análisis de la voluntad de la precandidata para la comisión de la infracción, resulta necesario destacar que en la sesión ordinaria celebrada por este Consejo General el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG519/2020, por el que se aprobaron los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, del Proceso Electoral Federal ordinario y locales concurrentes 2020-2021, del cual se desprende que los plazos de precampaña y la fiscalización de mérito en el estado de Baja California Sur corrieron en las fechas citadas a continuación:

| Entidad | Cargos | Duración de la precampaña (días) | Término de la precampaña | Duración del periodo de fiscalización una vez concluido el periodo (días) | Fecha tentativa de conclusión de fiscalización | Inicio de la campaña |
|---------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|
| Baja California Sur | Gubernatura | 40 | domingo, 31 de enero de 2021 | 53 | jueves, 25 de marzo de 2021 | domingo, 04 de abril de 2021 |

Así, derivado de dicho procedimiento y plazos, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó hallazgos de propaganda electoral en beneficio del precandidato incoado, admitió a trámite el procedimiento que por esta vía se resuelve.

Derivado de lo anterior, el diez de junio de dos mil veintiuno se le notificó al C. Víctor Manuel Castro Cosío el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó con los elementos de prueba que integraban el expediente en su contra. Al respecto, no se

recibió contestación por parte del denunciado al momento de elaborar la presente Resolución.

ii. Naturaleza y bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan.

En este tenor, ante la acreditación de una infracción en materia de fiscalización resulta necesario analizar si en la especie se está ante una puesta en peligro o una afectación real, a los bienes jurídicos tutelados, en el caso en concreto los principios de rendición de cuentas, transparencia en el uso de los recursos y equidad en la contienda electoral.

Al respecto, como quedó señalado en la exposición de motivos¹⁴ de la aprobación de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el decreto promulgado el 10 de febrero de 2014 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se suma a la larga lista de reformas en materia político-electoral de gran calado. Éste, a su vez, respondió a nuevas dificultades en materia de fiscalización, pero sobre todo, a las complicaciones derivadas de la heterogeneidad en el ejercicio de derechos políticos entre los ciudadanos mexicanos. Se encontró que el goce de estos derechos humanos está en función de la entidad en la que se reside; que la democratización a nivel local ha sido desigual; que, a nivel subnacional, permanecen arraigados varios enclaves autoritarios que nos impiden afirmar que la transición democrática es cosa del pasado.

Así, las modificaciones realizadas en 2014 por el Constituyente Permanente, tuvieron, como objetivo en materia de fiscalización, **fomentar una mayor rendición de cuentas de los legisladores hacia sus representados; generar condiciones de equidad entre las diversas fuerzas políticas en los comicios federales y locales**. En otras palabras, se buscó establecer, desde nuestra Carta Magna, un esquema institucional que asegure que todos los mexicanos, independientemente de la entidad en la que habiten, gocen de una democracia de calidad, en la que existan mecanismos que coadyuven a la pronta y efectiva fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos y los actos que con ellos se realizan, por lo que se estimó imperativo contar con la información de esos recursos en el momento en que se ejercen, con el objetivo de transparentar y agilizar la fiscalización, a fin de abonar a la rendición de cuentas.

¹⁴ Consultable en el link siguiente: https://www.te.gob.mx/normativa_fiscalizacion/media/files/cce051f391b43a5.pdf

Por otro lado, se continúa señalando en dicha exposición de motivos, respecto a la finalidad de la reforma en materia de fiscalización, que la **equidad en los procesos electorales** es uno de los más grandes y añejos reclamos que ha sido formulados en el sistema político de nuestro país, por lo que al hablar de *equidad se hace referencia a un piso parejo para todos los actores políticos que compiten por ocupar cargos de elección popular; a comicios justos en los que se compita de uno a uno, en los que la balanza no se incline a favor de una u otra fuerza.*

La fiscalización electoral conlleva un conjunto de tareas por medio de las cuales la autoridad electoral supervisa el origen y el destino de los recursos de los que hacen uso los diferentes actores u organizaciones electorales¹⁵. Con esto, se persiguen dos objetivos: **(i) que los recursos que ingresan a la competencia política no provengan de fuentes prohibidas o ilícitas; (ii) constatar que se destinan, exclusivamente, a los fines previstos por la normatividad.**

Una adecuada fiscalización permite procesos más competitivos y equitativos, e inhibe conductas que violentan la normatividad y los principios de transparencia y rendición de cuentas que son rectores en una democracia constitucional. **La fiscalización comprende actividades preventivas, normativas, de investigación y de operación que contribuyen al resguardo de los principios ejes de las funciones electorales administrativas.**

Por lo que, para dar celeridad a la fiscalización, se realizaron modificaciones, en primer lugar, a los plazos para la presentación de los informes ante la autoridad electoral y, en segundo lugar, se prevén instrumentos que facilitan la coordinación entre los órganos electorales y los órganos de inteligencia financiera para detectar movimientos irregulares, que puedan significar usos indebidos electorales de los recursos públicos de la administración pública federal, estatal o municipal.

En consecuencia, la conducta desplegada por el ciudadano infractor lesionó gravemente la rendición de cuentas, transparencia en los recursos y equidad en la contienda, al omitir presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña.

Bajo este modelo de fiscalización, se considera que el precandidato es responsable solidario y éste puede ser sancionado por incumplir con las obligaciones o cargas que se les imponen, que en el caso que nos ocupa consiste en la omisión de presentación de los informes de precampaña correspondientes, ello con

¹⁵ Instituto Federal Electoral. «El ABC de la fiscalización (a partidos políticos).» mayo de 2013. <http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/CNCS/CNCS-IFE-Responde/2013/05%20Mayo/abcfisc/abc.pdf>.

independencia de la responsabilidad exigida a los partidos, quienes también pueden ser sujetos de sanciones por incumplir con sus obligaciones.

Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el SUP-JDC-1521/2016, en el que determinó que la omisión de rendir informes de precampaña atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización.

iv. Circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que se cometió la infracción.

Las disposiciones normativas y reglamentarias rectoras del caso se encuentran vigentes desde el año 2014 y la interpretación respecto a las que al caso interesan ha quedado determinada por la máxima autoridad jurisdiccional por lo menos, desde el año 2016. Por tal motivo, ningún sujeto obligado puede invocar desconocimiento de la normativa electoral vigente en materia de fiscalización, ni respecto a las obligaciones y consecuencias que ésta les impone y tampoco con relación al sentido de la norma. En el caso, la persona incoada tenía conocimiento de la obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normativa, no sólo por la vigencia de la normativa, sino porque la autoridad fiscalizadora fundó en dicha normativa los requerimientos que le formuló y la relacionó con los hallazgos encontrados.

Ahora bien, el Partido Morena en la etapa de alegatos señaló que se acreditó que no hubo precampaña en Morena dentro del Proceso Electoral del cual deriva la queja en que se actúa, por lo que no existió la obligación de llevar a cabo la contabilidad de dicha etapa, pues nadie está obligado a lo imposible; sin embargo, como ha quedado acreditado, el partido político debe de presentar el informe de precampaña correspondiente a pesar de no haber llevado a cabo una precampaña y en el caso particular sí se acreditó que se realizaron gastos.

Por otro lado, como ya quedó acreditado en el caso concreto, el denunciado incumplió con la obligación de presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña en los plazos establecidos por la ley.

En consecuencia, ha quedado acreditado que en el caso en concreto, no medió voluntad por parte del ciudadano incoado de cumplir dentro del plazo previsto por la normatividad en materia de fiscalización, en su condición de precandidato, con la responsabilidad de presentar, ante el órgano correspondiente del Partido Político

Morena, el informe de ingresos y gastos de precampaña, afectado así el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

v. Intencionalidad y medios de ejecución.

En este tenor, al momento de graduar la sanción, se debe tomar en cuenta si fue una infracción culposa, ya que no puede ser igual o cercana la sanción a la de aquel que con intención cometió la falta.

En este orden de ideas, a pesar de que el C. Víctor Manuel Castro Cosío no dio respuesta a esta autoridad fiscalizadora, no es dable aceptar que el denunciado desconociera su deber de rendir informes, por lo que está probada la culpa en la omisión de entregar el informe de ingresos y egresos de precampaña; sin embargo, no existen elementos para suponer una probable intención del infractor en confundir o engañar a la autoridad fiscalizadora.

vi. El monto económico o beneficio involucrado.

Es importante señalar que en las infracciones en materia de fiscalización resulta válido analizar el monto o beneficio involucrado, de ahí que derivado de la respuesta efectuada por Facebook Inc., en el marco de la sustanciación del procedimiento de mérito, se advirtieron gastos por un monto de \$2,325,578.46 (dos millones trescientos veinticinco mil quinientos setenta y ocho pesos 46/100 M.N.) que no fueron reportados por el partido ni por precandidata infractora, mismos que debieron haber sido fiscalizados por la autoridad electoral; sin embargo, la propia conducta desplegada por el incoado impidió que la Unidad Técnica de Fiscalización tuviera certeza del flujo de recursos empleados en la precampaña de la precandidata.

El monto detectado mediante la respuesta al requerimiento realizado a Facebook Inc. no puede servir de base para determinar la afectación a los bienes jurídicamente tutelados derivada de la omisión de presentar informes, toda vez que, precisamente, la omisión es la que impide a la autoridad llevar a cabo una revisión exhaustiva del origen y destino de los recursos empleados durante esa etapa, esto es, le impide conocer y determinar la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de los recursos, lesionando con ello de forma grave los principios rectores del modelo de fiscalización: transparencia, rendición de cuentas y la equidad en dicha contienda electoral, ya que, la actitud omisiva del sujeto incoado evade los alcances de la fiscalización.

En efecto, los resultados arrojados con motivo de dicha revisión hacen referencia a los datos generales y estadísticos de las auditorías practicadas por la autoridad fiscalizadora, lo que da como resultado los hallazgos más relevantes.

El procedimiento de fiscalización constituye el conjunto sistematizado de actos mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General, ejerce medios de control y vigilancia de los recursos de los sujetos obligados para garantizar que su origen, monto y destino se apega a la licitud y a la legalidad. Es decir, por medio de la fiscalización, la autoridad fiscalizadora pone en funcionamiento los controles institucionales que garantizan la transparencia de los recursos y su debida comprobación.

Por ello, es claro que la omisión de presentar el informe de gastos evita que se lleven a cabo de forma integral los alcances de la fiscalización, violando la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de recursos, así como la transparencia en la rendición de cuentas, lo cual trae aparejado un daño mayor al reflejado en el monto económico de los hallazgos detectados por la autoridad fiscalizadora; pues desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia debe entenderse como un sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por la ciudadanía. La transparencia, no sólo involucra a la autoridad electoral, sino también a los partidos y sus candidatos, a los aspirantes a una candidatura independiente y a los candidatos independientes, quienes no sólo tienen obligaciones de transparencia legalmente trazadas, sino también la de responder a la ciudadanía de su actividad cotidiana y del modo en que utilizan los recursos con que cuentan durante el periodo de obtención de apoyo ciudadana, la precampaña y la campaña electoral.

Por lo anterior se puede concluir que, el sancionar sólo con base en el monto de los hallazgos encontrados, abre la puerta a que en lo sucesivo los actores políticos apuesten al engaño y a la evasión, para así omitir presentar sus informes por encontrar más benéfico solo hacerse cargo de una sanción económica, con base en los montos determinados a partir de los hallazgos que detecte la autoridad electoral, que reportar el total de sus operaciones y ser sujetos a un procedimiento de fiscalización integral.

Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que la sanción tiene como fin último disuadir de la realización de la conducta, y por lo tanto tiene que ser ejemplar en relación al bien jurídico infringido.

Por ende, la omisión en que incurrió la persona incoada afecta gravemente la rendición de cuentas que debe regir la contienda electoral, pues impidió que se verificaran circunstancias como que los recursos públicos o privados provinieran de fuentes autorizadas, que se hubieran respetado los límites establecidos en la norma respecto a los recursos, o bien que se hubieran empleado los mecanismos previstos en la norma para la recepción o aplicación de los recursos, entre muchas cuestiones más.

En suma, el monto del beneficio no es únicamente el declarado por el sujeto infractor, pues además de desconocerse la veracidad no solo del monto, sino del origen y destino de lo declarado, pues el beneficio obtenido por el sujeto infractor va más allá de un monto involucrado, esto es, sería soslayar que el beneficio más importante y que constituye la verdadera pretensión de los incoados es participar en una contienda electoral sin haber cumplido la totalidad de requisitos legales para ello, en detrimento de la equidad de la contienda, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que resulta de suma importancia, imponer la sanción que corresponda para inhibir conductas como la que nos ocupan y cumplir con la función inhibitoria de la potestad sancionadora de este Instituto.

vii. Impacto o trascendencia en la fiscalización, rendición de cuentas y la equidad.

En este sentido, la Sala Superior en el **SUP-JDC-1521/2016**, ha señalado que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, párrafo segundo; Base II, párrafos primero y penúltimo; Base IV; Base V, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo Segundo Transitorio del Decreto de reformas a la Ley Fundamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se desprenden los siguientes mandatos:

- El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo al que compete la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos tanto para los Procesos Electorales Federales como locales.
- La ley desarrollará las atribuciones del Consejo General para la fiscalización, así como la definición de los órganos técnicos responsables de llevar a cabo las revisiones e instruir los procedimientos respectivos.
- Por tanto, la atribución de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos tanto estatales como nacionales, sólo compete al Instituto Nacional

Electoral, por lo que al tratarse de un régimen nacional debe aplicar la Ley General que rige el nuevo sistema de fiscalización, a saber: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Por otro lado, de lo dispuesto por el invocado artículo 41 constitucional, también se desprende que en la ley se ordenarán procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y dispondrá las sanciones a imponer por el incumplimiento a esas disposiciones.

Esta última previsión es una medida eficaz que contribuye a que el Instituto Nacional Electoral pueda ejercer adecuadamente su atribución constitucional de supervisar lo concerniente al origen y destino de los recursos de los partidos políticos, permitiendo que desarrolle apropiadamente su labor de fiscalización.

Sobre el punto particular, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deben presentar informes de precampaña, señalando que los precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de tales informes.

En correlación con la disposición legal invocada, el artículo 223, numeral 7, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, reitera que los partidos políticos son responsables, entre otras cuestiones, de presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus precandidatos y candidatos; respetar el tope de gastos de precampaña y campaña; así como presentar la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea.

En efecto, de los preceptos invocados, se colige que los partidos políticos son directamente responsables en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen de éste es público o privado ya que tienen la obligación de llevar un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados, por todos y cada uno de los precandidatos y candidatos, resulten o no ganadores en la contienda electiva, e incluso, cuando determinen las candidaturas de forma directa, sin importar si es sólo un precandidato, el método electivo ni el nombre con que se designe al precandidato y el tiempo en que se lleva su designación.

En esa línea, el numeral 9 del citado precepto reglamentario prevé que los precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos son responsables de reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña ejercidos,

los recursos recibidos y destinados a su precampaña o campaña; así como entregar la documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido o coalición.

De lo anterior, se advierte que la facultad fiscalizadora de la autoridad tiene por fin constatar el uso y destino real de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en todo tiempo, lo que se traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus recursos.

Así, la **omisión de rendir informes de precampaña atenta de manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de fiscalización**, a diferencia de la presentación extemporánea de tales informes, que también constituye una infracción a la normativa electoral, sin embargo, esta sólo tiene como efecto retardar el ejercicio de la facultad fiscalizadora.

De ese modo, al omitir cumplir con su obligación de presentación del informe de precampaña, el C. Víctor Manuel Castro Cosío, afectó de forma grave el actual modelo de fiscalización y en consecuencia la rendición de cuentas que debieron regir su actuar como precandidata al cargo de Gobernador en el estado de Baja California Sur.

Así, una vez que han quedado analizados los aspectos referidos por el órgano jurisdiccional, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, de conformidad con lo siguiente:

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad acreditada, corresponde a una **omisión**¹⁶ de presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

¹⁶ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

Modo: El ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío omitió presentar **el informe** del periodo de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al ciudadano, surgieron derivado del escrito de queja presentado por la C. Jesús Armida Castro Guzmán en su carácter de candidata a la Gubernatura del estado de Baja California Sur por el Partido Verde Ecologista de México en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California Sur.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California Sur.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Acorde con la conducta que se analiza, la precandidata en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.¹⁷

La conducta infractora actualiza una falta sustantiva que presenta un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados y al modelo de fiscalización, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el informe de precampaña, se vulnera sustancialmente la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de los recursos, la transparencia en la rendición de cuentas y a

¹⁷ "Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña: (...) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas; (...)."

"Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas. (...) 6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán responsables de: a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición. (...)."

la equidad en la contienda electoral, porque la omisión impidió que la autoridad desplegara sus atribuciones fiscalizadoras, restando eficacia a los alcances de la auditoría, con lo cual se afecta gravemente el sistema de fiscalización.

En efecto, en el artículo 40 de la Constitución se encuentra establecido el principio democrático, como principio de legitimidad del sistema, esto es, como el núcleo de comprensión de la propia Constitución y como directriz del ordenamiento en su conjunto.

Este principio se proyecta en su dimensión material (derechos humanos) y en su dimensión estructural (división de poderes, estructura y atribuciones de éstos y elección de órganos representativos y de gobierno), sin que ambas dimensiones puedan disociarse, dado que el principio democrático opera como principio de legitimación del Estado y del Derecho.

Por la naturaleza intrínseca que el Poder Constituyente concedió al principio democrático, su eficacia interpretativa irradia a todo el ordenamiento, pues dicho principio funge como núcleo armonizador de la unidad sistémica.

En el **sistema electoral mexicano**, las elecciones tienen como **eje rector la transparencia**, lo que supone el cumplimiento de diversos supuestos que hacen posible que el resultado de las votaciones sea claro reflejo de lo que los electores han decidido. La transparencia de los resultados no es consecuencia de un solo suceso, sino de una secuencia de actos que tendrán como resultado la generación de confianza en la sociedad, que abarca desde los actos de organización electoral hasta la rendición de cuentas por parte de los actores políticos, que informan a la ciudadanía, con la intermediación de la autoridad electoral, la manera como utilizan sus recursos para acceder a una candidatura y, eventualmente, al ejercicio de un cargo público.

Desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia debe entenderse como un sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por la ciudadanía. La transparencia, no sólo involucra a la autoridad electoral, sino también a los partidos y sus precandidatos y candidatos, a los aspirantes a una candidatura independiente y a los candidatos independientes, **quienes no sólo tienen obligaciones de transparencia legalmente trazadas, sino también la de responder a la ciudadanía de su actividad cotidiana y del modo en que utilizan los recursos con que cuentan durante el periodo de obtención de apoyo ciudadana, la precampaña y la campaña electoral.**

Es decir, en el sistema electoral, la transparencia tiene dos posibles efectos: visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales – autoridades, partidos y candidatos- y, a su vez, generar información socialmente útil, que permite que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos con que cuentan los partidos y candidatos, tanto para su operación ordinaria, como aquéllos que aplican para los procesos internos de selección, obtención de apoyo ciudadano o los destinados para sufragar los gastos de una campaña electoral.

Constitucionalmente se han fijado una serie de principios que rigen la materia electoral para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos utilizados en el ámbito electoral. De este modo, el artículo 41 de la Constitución Federal establece principios rectores que permiten el equilibrio del sistema, al favorecer la autenticidad de las elecciones, la igualdad de condiciones entre los contendientes, la transparencia en el uso de recursos y la operación de medios de control y vigilancia para el ejercicio del gasto, entre los que se encuentran los siguientes:

- **Equidad de medios materiales.** De acuerdo con este principio, la ley garantizará que los partidos cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades y señala las reglas a que se sujeta el financiamiento público y el que destinen a las campañas electorales.
- **Prevalencia del recurso público.** Acorde con este principio, la ley debe fijar las reglas del financiamiento de los partidos y de sus campañas, de modo que el financiamiento público tenga preeminencia sobre el privado.
- **Suficiencia de recursos para el cumplimiento de fines.** Conforme con este principio, el financiamiento público que reciban los partidos políticos en términos de ley, debe ser suficiente para el sostenimiento de sus actividades permanentes y aquellas que despliegan para obtener el voto ciudadano.
- **Medidas de austeridad para el ejercicio del gasto.** Este principio se refiere a que los gastos que realicen quienes participan en una contienda electoral (en procesos internos de selección, periodos de obtención de apoyo ciudadano y de campañas electorales) deben ser racionales y sujeto al escrutinio público e institucional.

- **Medios efectivos de control y vigilancia.** Conforme a este principio, el sistema de fiscalización electoral cuenta con los mecanismos de control y vigilancia a que se someten los sujetos obligados a la comprobación del origen, uso y destino de sus recursos.
- **Potestad fiscalizadora del Consejo General del INE.** Acorde con este principio, el órgano máximo de dirección tiene la atribución de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y candidatos, así como de sus campañas, por lo que se puede valer de órganos técnicos para realizar esta función e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones, trascendiendo, para ello, los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contando con el apoyo de las autoridades federales y locales.

A partir de estos principios, legalmente se han establecido las reglas tendentes a garantizar la transparencia y publicidad de los recursos utilizados en el ámbito electoral, entre las que se encuentran:

- **Prohibición de aportaciones finalistas,** se refiere a que se proscribe que determinados sujetos realicen aportaciones, para evitar que sean entregadas a condición de que se cumpla con una tarea u objetivo ulterior.
- **Existencia de controles internos eficientes,** esto es, de mecanismos que den garantía de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables. Por lo que hay un órgano del sujeto obligado encargado de la administración de los recursos, que tendrá como parte de sus obligaciones presentar informes de ingresos y egresos; y,
- **Existencia de controles institucionales que garanticen la transparencia de los recursos y su debida comprobación,** se refiere a que, para la vigilancia del manejo de los recursos, existe una Comisión de Fiscalización, de carácter permanente, encargada de vigilar las finanzas de los sujetos obligados y de revisar los informes de gastos que presenten, con auxilio de un órgano técnico.

La conjugación de estos principios y reglas hace posible el funcionamiento del sistema de fiscalización, pues permite que la autoridad fiscalizadora cuente con atribuciones suficientes para llevar a cabo sus tareas de control y vigilancia; que los sujetos obligados [partidos políticos, precandidatas(os), candidatos(as), así como aspirantes a una candidatura independiente] **transparenten y rindan**

cuentas, y que la ciudadanía conozca, de primera mano, el modo en que dichos sujetos emplean los recursos con que cuentan, lo que al final no sólo genera un efecto informativo positivo, sino que permite que el electorado emita un voto libre y razonado, derivado del cúmulo de información que recibe de modo previo a que acuda a las urnas y vote en favor de una opción determinada.

Reglas previstas para el procedimiento de fiscalización

El procedimiento de fiscalización constituye el conjunto sistematizado de actos mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General ejerce medios de control y vigilancia de los recursos de los sujetos obligados para garantizar que su origen, monto y destino se apegue a la licitud y a la legalidad.

Por medio de la fiscalización, la autoridad fiscalizadora pone en funcionamiento los controles institucionales que garantizan la transparencia de los recursos y su debida comprobación.

Este procedimiento se desahoga en varias etapas. Para el caso en estudio cabe destacar la presentación de los informes.

De acuerdo al artículo 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.

Una de esas reglas está relacionada con el deber de generar y conservar los documentos en los que se sustenta cada una de las operaciones de ingresos y egresos que realizan durante las precampañas, obtención de apoyo ciudadano y campañas electorales, con independencia de que, por regla, esos elementos de respaldo se tengan que registrar en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

De conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, la revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.

En términos de lo estipulado en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, III y V, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña en los plazos establecidos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. El artículo 80 del mismo ordenamiento, establece las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos respecto de los informes de precampaña.

Bienes jurídicos tutelados a través de los procedimientos de fiscalización durante los procesos electorales.

Como se señaló, el procedimiento de fiscalización es el conjunto sistematizado de actos en los que participan los órganos del Instituto (principalmente la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General); los sujetos obligados [partidos políticos, nacionales y locales, coaliciones, precandidatos(as), aspirantes a candidatos(as) independientes, candidatos(as)] y los sujetos indirectamente responsables (diversos proveedores de bienes y servicios con los que contratan los sujetos obligados).

Su finalidad es generar certeza y seguridad a la ciudadanía respecto del origen y aplicación de los recursos que ejercen los sujetos obligados para lograr de manera mediata o inmediata la renovación de los depositarios del poder público a nivel federal, local y municipal, así como permitir a la autoridad fiscalizadora dilucidar si en la contienda electoral se observaron los principios de equidad en la aplicación de los recursos económicos por parte de los actores políticos y el de la licitud en origen y aplicación de los recursos.

Acorde con lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley General de Partidos Políticos, se pueden distinguir dos tipos de procedimientos en materia de fiscalización, a saber:

- A. El procedimiento que tiene por objeto verificar el origen y aplicación de los recursos que ejercen los partidos políticos de manera anual respecto del financiamiento para actividades ordinarias y específicas.
- B. El procedimiento que tiene por finalidad revisar los ingresos y egresos de los sujetos obligados en el contexto de las diversas etapas del Proceso Electoral.

La fiscalización de los recursos aplicados por los sujetos obligados al llevar a cabo los actos vinculados con las precampañas, etapa de obtención de apoyo al ciudadano y campañas electorales (B) **tiene por objeto que se verifiquen en tiempo real, de manera integral y consolidada, los ingresos, públicos y privados, así como los gastos que ejercen los sujetos obligados durante los respectivos comicios electorales. Lo anterior, a efecto de lograr una revisión eficaz, oportuna y útil, que contribuya a tutelar los principios de transparencia y rendición de cuentas** y, en particular en el caso de la revisión de los ingresos y gastos ejercidos durante **precampaña**, obtención de apoyo ciudadano y campañas, con la sustanciación y resolución de tales procedimientos se pretende hacer vigente el principio de equidad e igualdad en los procesos electorales, al tiempo de dar funcionalidad al sistema de nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base VI, de la Constitución, dado a que a partir de la reforma político electoral de 2014 se establece como causa constitucional que impide el reconocer la validez a determinada elección, el rebase del límite del gasto de campaña en un 5% del monto autorizado, cuando ello se acredite de manera objetiva, material y sea determinante.

Obligaciones de las y los aspirantes, precandidatos y candidatos en materia de fiscalización.

Los mecanismos de fiscalización avalan la legitimidad del proceso democrático representativo, ya que a través de estos se asegura que los contendientes actúen conforme a reglas preestablecidas, con medios económicos que garantizarán la **equidad de la contienda**.

Asimismo, garantizan la libertad de sufragio y de los derechos político-electorales, al momento que evitan que los partidos y las personas que aspiren a un cargo de elección popular cedan ante presiones o intereses particulares que pongan en riesgo la voluntad del elector, haciendo de una oferta política una máscara de actos ilegales o de intereses particulares ajenos a la contienda electoral.

La fiscalización, como medio institucional, verifica que los recursos utilizados tengan un origen lícito, que esos recursos sean utilizados sólo para solventar actividades que reflejen un fin electoral o partidista, y da certeza respecto a que todos los contendientes que buscan acceder a un cargo de elección popular tengan las condiciones mínimas necesarias para competir en circunstancias igualmente ventajosas, sin que exista la posibilidad de que alguno de ellos tenga un capital político superior sustentado en la ilicitud.

Por esta razón, de acuerdo con la normativa electoral federal, las y los aspirantes a una candidatura independiente, los partidos políticos, sus precandidatos/as y candidatos/as, así como las y los candidatos por la vía independiente, tienen el deber de presentar los respectivos informes (de ejercicio ordinario, de apoyo ciudadano, de precampaña y campaña) en los cuales rindan cuentas de manera clara y transparente de los ingresos obtenidos y egresos realizados, con la finalidad de que la autoridad esté en aptitud de revisar que los ingresos y egresos reportados efectivamente se apegan a la ley y a lo informado.

La presentación de dichos informes tiene por objeto cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y certeza respecto de los recursos que rigen los sistemas democráticos, así como garantizar el derecho a la información que le asiste a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado.

Las reglas y procedimientos para la presentación y revisión de los informes de permiten la comprobación de los ingresos y egresos generados por quienes aspiran a obtener un cargo de elección popular, que debe ser fortalecida por reglas que hagan posible la eficacia comprobatoria de los ingresos y egreso derivados de su aspiración.

Consecuencia del incumplimiento de la obligación de presentar informes de ingresos y egresos por parte de los sujetos obligados

De conformidad con los artículos 380, inciso g), 430 y 431, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es obligación de los sujetos obligados presentar ante la autoridad los informes de ingresos y gastos. La legislación regula las consecuencias que derivan del incumplimiento de esta obligación.

Por cuanto hace a las y los aspirantes a una candidatura independiente, el artículo 378 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que le será negado el registro al aspirante que no entregue, a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, dentro del plazo establecido el informe de ingresos y egresos. Asimismo, establece que las y los aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura independiente omitan entregar el referido informe serán sancionados en los términos de esa Ley.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si un precandidato (a) incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo legalmente establecido y hubiera obtenido la mayoría de votos en

el proceso de selección interna de su partido, no podrá ser registrada (a) legalmente como candidata (o), mientras que los precandidatos (as) que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de la propia ley.

Finalmente, de acuerdo con los artículos 445, inciso d) y 446 inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la omisión de presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano, gastos de precampaña o campaña.

Como se puede apreciar, son dos las consecuencias previstas en la normativa, para el incumplimiento de la obligación de presentar los informes. La primera está relacionada con el ejercicio del derecho al sufragio pasivo (derecho a ser votado) y la segunda con la infracción por la conducta omisiva, que atenta contra los principios y bienes jurídicos tutelados en el procedimiento de fiscalización.

A partir de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 35, fracciones I y II; 41, párrafo segundo, Bases I, II, III y IV, y 116, fracciones I, segundo párrafo, y IV, incisos j), y k), en relación con el 36, fracción III; 39; 40; 54; 56; 115, primer párrafo, Bases I y VIII; 122, apartado A, Bases II, III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Superior ha estimado válidas y razonables las disposiciones legales que prevén dichas consecuencias. Parte de la base de que el derecho político electoral de voto pasivo no es absoluto, por lo que está sujeto a diversos límites y restricciones establecidos en la propia Norma Fundamental o en las leyes generales de la materia.

Bajo esas premisas, el citado órgano jurisdiccional ha estimado válido y razonable que las personas interesadas en ocupar un cargo de elección popular observen, entre otras normas, las que regulan las obligaciones en materia de fiscalización de los ingresos y gastos, **porque de esta manera se hacen vigentes y efectivos los principios rectores de las elecciones, entre otros, la certeza, seguridad jurídica, transparencia y equidad en el origen y aplicación de los recursos económicos** y, en consecuencia, ha considerado que lo previsto en los artículos 380, inciso g), 430 y 431, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye un requisito razonable y necesario para obtener el registro como candidato(a) a un cargo de elección popular (federal o local) el que se presenten, en tiempo y forma, ante la autoridad administrativa electoral nacional, los respectivos informes de ingresos y gastos ejercidos durante las precampañas o en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, respectivamente, los cuales además

deben permitir a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general dilucidar con certeza la aplicación de esos recursos, así como determinar si se observaron los límites de gastos en esa etapas de la elección.

Conforme con lo hasta aquí expuesto, es claro que las faltas sustanciales acreditadas trastocaron los valores, principios y reglas del modelo de fiscalización, porque la omisión de presentar el informe de precampaña, a pesar de que el precandidato fue requerido para ello, como resultado de los hallazgos encontrados por la autoridad fiscalizadora, impidió garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos, con lo cual se vulneró la certeza en el ejercicio del gasto y aplicación de recursos, la transparencia y rendición de cuentas, porque impidió que la autoridad fiscalizadora contara con los elementos necesarios para desplegar de manera completa sus facultades de fiscalización y también impidió la generación de información socialmente útil, que permita que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos utilizados en la precampaña.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que aun cuando el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos (a los partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de fiscalización y a las y los precandidatos como sujetos obligados solidarios) lo cierto que la responsabilidad es correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido, tan es así, que la propia legislación estipula una consecuencia jurídica directa para la o el precandidato, cuando incumple con sus obligaciones, así como las sanciones que ambos pueden soportar por realizar conductas infractoras.

Conforme con lo anterior, es claro que la conducta infractora trasgrede valores, principio y reglas de gran relevancia en el sistema electoral, porque la omisión en la presentación de los informes trastoca directamente el sistema de fiscalización y, por ende, los principio, reglas y controles establecidos para la concreción del principio democrático.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad es el de garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, mismo que fue infringido por la conducta señalada del precandidato infractor.

En ese sentido, en el presente caso la conducta acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una **falta** de resultado que ocasionan un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los demás aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los precandidatos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta materia de estudio.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidaturas de partidos políticos, la valoración de los parámetro previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por la falta cometida por las candidaturas de partidos políticos, deber ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los candidatos de partidos políticos para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada directamente por los candidatos, de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a saber:

| INGRESOS | SANCIÓN |
|---------------------------------|----------------------|
| \$0 a \$100,000.00 | Amonestación pública |
| \$101,000.00 a \$300,000.00 | Hasta el 5% |
| \$301,000.00 a \$600,000.00 | Hasta el 10% |
| \$601,000.00 a \$1,000,000.00 | Hasta el 15% |
| \$1,000,001.00 a \$1,500,000.00 | Hasta el 20% |
| \$1,500,001 en adelante | Hasta el 25% |

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica del ciudadano mediante razón y constancia se hizo constar la búsqueda en el SNR a efecto de conocer informe de capacidad económica presentado por el ciudadano en su calidad de candidato, obteniendo la siguiente información:

| INGRESOS | EGRESOS | SALDO DE FLUJO (INGRESOS-EGRESOS) |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| \$360,000.00 | \$240,000.00 | \$120,000.00 |

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los documentos presentados por el Servicio de Administración Tributaria y la razón y constancia

realizada por la autoridad fiscalizadora, son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el ciudadano referido tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de sus actividades, pues aun y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Finalmente, una vez realizado el análisis de los elementos para individualizar la sanción, lo procedente es realizar la calificación de la falta al tenor de las consideraciones siguientes:

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ESPECIAL**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el precandidato, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar el informe de precampaña respectivo, conducta desplegada de forma culposa.

- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conducta objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, del presente considerando en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el ciudadano conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, el requerimiento emitido por la autoridad, y el plazo de revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral correspondiente.
- Que se acreditó la disponibilidad del ciudadano para presentar información y documentación respecto a los recursos utilizados en su precampaña.
- Que se trató de una conducta culposa.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, valorando las circunstancias del caso con base en la perspectiva de derechos humanos y la finalidad punitiva de dicha sanción.

Los supuestos normativos previstos en el artículo citado se detallan a continuación:

“(…)

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y

III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

(...)”

Dado que una de las sanciones precisadas - *la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato*- debido a los tiempos en que se elabora ésta presente Resolución, resulta ilógico retirarle el derecho a ser registrado, por lo anterior, lo que procede para el C. Víctor Manuel Castro Cosío es una sanción de índole económica, sin embargo, previo a la imposición de la sanción resulta necesario que esta autoridad realice un ejercicio de ponderación entre el derecho humano en comento y los bienes jurídicos afectados con su conducta desplegada.

Una vez precisado lo anterior, es de resaltarse que el Estado mexicano a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, entró en un cambio de paradigma sobre la conceptualización de los derechos humanos –fundamentales-, las reglas, y los principios que inherentemente giran en torno a ellos, como lo es, el de dignidad humana, lo anterior obligó a realizar desde una perspectiva filosófica la diferencia entre los grados de satisfacción de los derechos, libertades, reglas, principios y valores, reconocidos a nivel constitucional y también convencional.

Ahora bien, en el sistema jurídico mexicano según ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **no existen derechos humanos absolutos**, esto es, todo derecho humano puede ser restringido de manera justificada y proporcional, de ahí que se estima que los derechos humanos pueden ser considerados como relativos u optimizables, lo cual se realiza a través de un ejercicio de ponderación.

Resulta aplicable, el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada 1a. CCXV/2013 (10a.), que a la letra establece:

DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. *Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes*

*dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) **que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).***

Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Así, para saber si en el caso en concreto se reúnen los requisitos para restringir válidamente el derecho a ser votado del C. Víctor Manuel Castro Cosío, resulta importante hacer las precisiones siguientes:

El derecho al voto, es una precondition de la democracia, ya que no podría haber elecciones sin su existencia. *Esta facultad se puede ejercer mediante dos modalidades: el voto activo y el pasivo. La primera implica el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes; la segunda, el de ser electo.*¹⁸

En el orden jurídico mexicano, este derecho se encuentra previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como un derecho del ciudadano el “poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

Ahora bien, el derecho a ser votado no solo es un derecho subjetivo de los ciudadanos, sino que confiere una calidad de obligados a las personas titulares de tal prerrogativa; al igual que las obligaciones a que alude el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no son solamente

¹⁸ Figueroa Salmoral, Gabriela (2014). *Tutela del derecho a ser votado en los mecanismos de representación proporcional*. Temas selectos de Derecho Electoral No. 41. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; pág. 19.

facultades, sino deberes. **En este sentido debemos atender que el derecho al voto se reconoce para su goce y al mismo tiempo para cumplir deberes que conlleva.**

En este caso el derecho a ser votado, se refiere al derecho de cualquier ciudadano a participar como candidato a algún puesto de elección popular; cuyo deber contraído al ejercer dicho derecho es el **satisfacer los requisitos y apegarse a los supuestos normativos que se establecen en la Constitución y las Leyes reglamentarias.**

Respecto a las sanciones, debe señalarse que por su propia naturaleza implican la privación o restricción de un bien o derecho que pertenece a la persona responsable de la infracción, la cual se encuentra justificada por la finalidad que éstas persiguen: la protección del ordenamiento jurídico (intangibilidad y coercitividad del Derecho) para lograr los fines previstos en las normas y la protección de los bienes jurídicos que tutelan.

El régimen sancionador previsto en la materia electoral supone un orden eficaz para garantizar que los sujetos responsables de las infracciones reciban sanciones acordes a la gravedad de la conducta infractora, en la medida que la conminación o restricción de los derechos o bienes del sujeto infractor se corresponda con la magnitud de la lesión a los bienes jurídicamente tutelados. Por ello, los principios de razonabilidad y proporcionalidad implican que al aplicarse a cada caso concreto una sanción debe procederse de forma previa a realizar un escrutinio o test mediante el cual se busque establecer que los **resultados producidos sean acordes a las finalidades constitucionalmente legítimas para las cuales están establecidas las normas y las sanciones.** Esto es, que las sanciones sean adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de alcanzar el fin perseguido, que tengan las consecuencias suficientes para lograr la finalidad perseguida por la sanción de forma tal que no resulten una carga desmedida o injustificada, pero tampoco que resulte insuficiente para inhibir conductas que lesionen los bienes jurídicos tutelados.

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor la sanción ponderando las circunstancias particulares del caso, así como la afectación del bien o bienes jurídicos protegidos, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la **prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico**, para alcanzar los fines previstos por las normas y la protección de los bienes jurídicos que tutelan.

En este sentido el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación sustancial para los partidos políticos y precandidatos de presentar los informes de precampaña respecto del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de los procesos internos de selección de sus candidatos, de manera individual por cada uno de los precandidatos y para cada precandidatura, para lo cual, deberán de acompañar la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La no presentación de los informes de precampaña vulnera la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, ya que impide que la autoridad fiscalice los recursos que fueron utilizados por los partidos políticos y precandidatos en la competencia interna para designación de sus candidatos a un cargo de elección popular. Así es necesario que los informes de ingresos y gastos de precampaña se presente en los plazos establecidos por la ley con el fin de que la autoridad pueda llevar a cabo sus funciones de fiscalización.

Esta función fiscalizadora se realiza mediante actividades preventivas, normativas, de vigilancia, de control operativo y, en última instancia, de investigación. Sus principales objetivos son los de asegurar: a) la transparencia y rendición de cuentas, como principios que permiten visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales – autoridades, partidos, personas precandidatas y candidatas- y, a su vez, generar información socialmente útil, que permita que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos con que cuentan los referidos sujetos, tanto para su operación ordinaria, como aquellos que aplican para los procesos internos de selección o los destinados para sufragar los gastos de una campaña electoral, y b) la equidad y legalidad en la actuación de los partidos políticos y demás sujetos obligados para la realización de sus fines. Por ello, el desarrollo cabal de la tarea de fiscalización no puede entenderse como una afrenta a los partidos políticos, sino como un ejercicio que legitima y fortalece la competencia democrática en el sistema de partidos¹⁹.

¹⁹ Woldenberg, José (2002), La construcción de la democracia, Plaza y Janés, México, pág. 337.

En el modelo actual de fiscalización los precandidatos son responsables solidarios y pueden ser sancionados por incumplir con las obligaciones o cargas que se les imponen –en este caso por la falta de presentación de los informes de precampaña– con independencia de la responsabilidad exigida a los partidos, a quienes también se les puede sancionar por incumplir con sus obligaciones.

Precisado lo anterior, se procede a verificar si en la especie se cumplen con los requisitos necesarios para restringir el derecho a ser votado, de conformidad con los incisos siguientes:

- a) Se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales).**

Al respecto, como ya quedó precisado en los artículos 229 numeral 3 y la citada fracción III del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral, es la autoridad competente para determinar que ante la omisión de presentar el Informe de precampaña es dable sancionar a los precandidatos con la pérdida o cancelación del registro a ser candidato, esto es, a ser votado.

La anterior, previsión legal tienen como sustento que se lleve a cabo una adecuada fiscalización en materia electoral, lo cual permite procesos más competitivos y equitativos, e inhibe conductas que violentan la normatividad, así se acredita un interés general superior al de un solo ciudadano.

En consecuencia, en el caso en concreto el primer requisito ha quedado acreditado, es decir, existe una previsión normativa que prevé restringir el derecho a ser votado en aras de proteger la equidad en la contienda electoral como interés superior de la sociedad mexicana.

- b) Que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática**

Por lo tanto, del marco legal en materia de fiscalización y de manera particular de la obligación de presentar los informes de precampaña y las consecuencias jurídicas en caso de no presentarlos en los plazos establecidos, se advierte que el legislador buscó proteger bienes jurídicos de la mayor relevancia como son la

facultad fiscalizadora de la autoridad administrativa, para la salvaguarda del interés general de dotar todo el Proceso Electoral de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, para con ello brindar de una adecuada equidad la vida democrática mexicana.

En esa medida, lo procedente ahora es realizar el ejercicio de ponderación respecto a la sanción prevista en la fracción III del citado precepto legal, porque dicha sanción implica una limitación al derecho de ser votado, por lo que debe revisarse si resulta acorde a la gravedad de la conducta infractora, y si se corresponde con la magnitud de la lesión a los bienes jurídicamente tutelados, entendiendo por ponderación el método interpretativo para la solución de conflictos entre derechos (principios o reglas), que operan como mandatos de optimización, es decir aquellos que son concebidos como relativos o cuya realización no protege en toda su extensión a un supuesto de hecho, por lo que admiten restricciones siempre y cuando estas superen el tamiz constitucional, persiguiendo un fin de esa naturaleza.

Robert Alexy²⁰, en su obra *Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad*²¹, refiere que la “Ley de ponderación”, dicta “Como alto sea el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio, tanto tiene que ser la importancia de la realización del otro”, continúa señalando que *la ley de ponderación expresa que optimizar en relación con un principio colisionante no consiste en otra cosa que ponderar. La ley de ponderación muestra que ésta puede descomponerse en tres pasos. En el primero debe constatarse el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio. A él debe seguir en un segundo paso la comprobación de la importancia de la realización del principio contrario. En un tercer paso finalmente debe averiguarse si la importancia de la realización del principio contrario justifica el perjuicio o incumplimiento del otro.*”

En razón de lo anterior, es claro que existe una colisión entre la omisión de presentar el informe de precampaña por parte del C. Víctor Manuel Castro Cosío y la posible imposición de la sanción de pérdida o cancelación del registro del mismo como candidato a Gobernador de Baja California Sur, pues con ello se restringiría el derecho humano del ciudadano a ser votado.

Al respecto, cobran aplicación al caso las razones que sustentan la Tesis 1.ª CCCXI/2014 (10.ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro **PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD**

²⁰ Alexy, Robert. “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad.” en *El canon neoconstitucional*, pp. 106-116. Editorial Trotta, 2010.

²¹ Originalmente publicado como “*Grundrechte, Abwägung und Rationalität*”.

EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO²².

Consecuentemente, las sanciones previstas en las disposiciones legales invocadas (la pérdida del derecho a ser registrada como candidata o, en su caso, la cancelación del registro) no pueden ser aplicadas de forma automática o categórica en todos los casos, sino, por un lado, es necesario, desde la dimensión cualitativa, atender los bienes tutelados y, desde la dimensión cuantitativa, tener en cuenta la magnitud del bien y la lesión a este.

No debe pasar desapercibido que este Instituto, no solo tiene la obligación el velar porque sus sanciones sean proporcionales en razón de los sujetos incoados, sino que tiene a su vez como una de sus atribuciones principales la de garantizar y legitimar el ejercicio efectivo del derecho humano de la ciudadanía al sufragio pasivo de conformidad con los artículos 1.º y 35, fracción II de la Constitución, de forma tal que las únicas restricciones sean objetivas, razonables y, por lo tanto, proporcionales.

Al respecto, conforme al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas²³ cualquier condición que se imponga al ejercicio de los derechos a votar y ser elegido, consagrados, de entre otros en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deberá basarse en criterios objetivos y razonables.

En el mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho al voto adquiere una especial relevancia en las sociedades democráticas; pues los presupuestos de un Estado democrático se fundamentan en la participación inclusiva y universal de los ciudadanos; es por ello, que estos deben tomarse en consideración en la interpretación y aplicación del derecho²⁴.

Marco normativo del derecho al sufragio

Como premisa normativa inicial es necesario señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior considerar que el derecho de la ciudadanía al sufragio pasivo, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, en relación con el

²² Registro digital 2007343.

²³ ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 25, La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 57.º período de sesiones, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 1996, párrs. 2 a 5.

²⁴ *Ibid.*, párr. 15.

²⁴ CEDH, Case of Hirst v. The United Kingdom (No. 2), Application no. 74025/01, párrafos. 58 -62.

artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su correlativo artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho humano fundamental de carácter político-electoral de base constitucional y configuración legal; lo que implica que puede ser válidamente regulado por la legislatura ordinaria, siempre que se respete su contenido esencial y, por tanto, no se impongan condiciones que hagan nugatorio su contenido, o bien sean irrazonables, carentes de una base objetiva o desproporcionadas.

En esa línea, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las restricciones a los derechos de participación política deben ser interpretadas limitativamente, y en caso de encontrarse ante una diversidad de sentidos sobre el significado de una norma restrictiva, debe preferirse aquella que restrinja en menor medida el ejercicio del derecho a ser votado²⁵.

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido el mismo criterio, adicionando que para su aplicación, se debe cumplir con el principio de legalidad; es decir, dichas restricciones y/o limitaciones deben estar expresamente previstas en una ley y cumplir el requisito de proporcionalidad²⁶; esto es, el derecho al voto debe apreciarse desde la dimensión de la protección hasta su ejercicio efectivo.

Así pues, el derecho humano a la participación política previsto en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no protege una forma de organización política en particular, sino los diversos mecanismos a partir de los cuales la voluntad general puede trascender en las decisiones públicas; ello, atendiendo a que es a través del derecho al voto, que las sociedades adquieren la posibilidad de participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos, se involucra a la voluntad popular en la libre determinación de las decisiones políticas y potencializa la constitución de formas de gobierno democráticas, consecuentemente cualquier restricción que se imponga a su ejercicio deberá basarse en criterios objetivos, claros y razonables²⁷.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en una sociedad democrática, el reconocimiento de los derechos y libertades inherentes de la persona, su garantía y el respeto al Estado de derecho constituyen una triada indispensable; asimismo que de entre las condiciones necesarias para alcanzar una

²⁵ Pleno de la SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 74/2008 y sus acumulados, Sentencia de 12 de enero de 2010, pág. 91.

²⁶ Tesis LXVI/2016 de rubro **SEPARACIÓN DEL CARGO. NO RESULTA EXIGIBLE A DIPUTADOS FEDERALES PARA POSTULARSE AL CARGO DE JEFE DELEGACIONAL**. Consultable en *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 133 y 134.

²⁷ ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General 25, La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 57.º período de sesiones, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 1996, párrs. 2 a 5.

sociedad democrática, se encuentra: i) el derecho de acceso al cargo y su ejercicio de conformidad con la ley; ii) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto; la existencia de un régimen plural de participación; y, iii) la separación e independencia de los poderes públicos²⁸.

Establecido lo anterior, es importante señalar que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso a), b), d), f) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines de este Instituto, contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; **asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales** y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; **llevar a cabo la promoción del voto informado**, entre otros.

Así pues, este Consejo General no puede obviar que el 6 de junio de la presente anualidad se celebra la Jornada Electoral, y que es impertativo para este Instituto velar por la integridad del Proceso Electoral y garantizar el ejercicio libre, certero e informado del derecho por las y los ciudadanos a votar, por lo que las determinaciones que éste emita, deberán generar condiciones que permitan responder a dichas obligaciones.

Por consiguiente, resulta necesario apartarse de una interpretación —literal o de algún otro tipo de interpretación que arroje un producto similar— de las disposiciones legales en estudio que den como resultado una lectura desproporcionada y, en su lugar, preferir **una interpretación que otorgue una protección más amplia al derecho humano fundamental al sufragio pasivo** frente a las obligaciones derivadas del sistema de fiscalización y, en particular, de las obligaciones de los partidos y de los precandidatos de rendir cuentas.

Cabe señalar que estas obligaciones derivan del mandato constitucional de vigilar el origen y el destino de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos.

Por tanto, en el caso concreto, la sanción prevista en la fracción III del citado precepto legal, consistente en retirarle al C. Víctor Manuel Castro Cosío, no es la idónea, toda vez al restringir su derecho a ser votada se violentaría la integridad de la contienda electoral, ya que no solo se afecta el derecho del ciudadano si no que se afecta el derecho de quien vota al lesionar la certeza de los electores, en virtud del calendario electoral al que se está sujeto.

²⁸ Corte IDH, Caso Yatama vs., Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, No. 127, párrs. 191 a 194.

Señalado lo anterior, es dable establecer que la prevista en la fracción I, consistente en una amonestación pública sería una sanción que no se corresponde con el grado de afectación de los bienes jurídicos tutelados, pues ésta implica hacer un llamado o advertencia a la ciudadana infractora, a fin de que enmiende su conducta.

En tales condiciones, lo procedente ahora es analizar si en el caso en concreto, resulta viable imponer al C. Víctor Manuel Castro Cosío la sanción prevista en la fracción II del citado precepto legal.

Ahora bien, a fin de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de la infractora, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el **inciso h)** del presente apartado, **denominado “La capacidad económica del sujeto infractor”**, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el ciudadano cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción II** del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **multa** de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a **415 (cuatrocientas quince) Unidades de Medida y Actualización**, cantidad que asciende a **\$35,972.20 (treinta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al ciudadano Tomás Zavala González, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **415 (cuatrocientas quince)**

Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a **\$35,972.20 (treinta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

B. Imposición de la sanción al partido político.

En este sentido, con base en los argumento esgrimidos en el considerando **2.4** de la presente Resolución, se tuvo por acreditada la omisión de presentación de un informe de ingresos y gastos, y toda vez que la autoridad fiscalizadora les ha garantizado a los sujetos obligados el debido proceso, al emplazarlos y darles la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera y, toda vez que la falta de informe impide que la autoridad fiscalizadora cuente con elementos para determinar la existencia de algún error o inconsistencia. En tal virtud, la determinación correspondiente a la procedencia o no del registro o su cancelación deberá ser atendida en la presente Resolución del Consejo General.

En consecuencia, la responsabilidad del partido político se analizará en el apartado siguiente para los efectos conducentes.

Al respecto, se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción.

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad acreditada, mismas que corresponde a una **omisión**²⁹ de presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

²⁹ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

El partido político omitió presentar **el informe** del periodo de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de la revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California Sur.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Baja California Sur.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el informe de precampaña, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En las conductas que se analizan, el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos³⁰.

Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente el principio de legalidad, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es el rendir cuentas ante la autoridad de manera transparente, inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral,

³⁰ Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: a) Informes de precampaña: (...) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino también lo son de manera solidaria todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos.

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra constreñido.

Es importante señalar que una de las funciones de esta autoridad fiscalizadora es realizar actividades preventivas, con el objeto de garantizar la certeza y transparencia en el manejo de recursos; así como garantizar el principio de legalidad en la actuación de los sujetos obligados. La aplicación efectiva de las normas en materia de fiscalización radica en buena medida en el diseño de las mismas a la luz de los bienes jurídicos que pretenden tutelar, por lo que el partido político, al ser omiso en presentar el Informe de Precampaña, del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California Sur, vulnera y obstruye el desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas.

En consecuencia, al no tener certeza sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se vulnera de manera directa los principios de fiscalización que los entes están obligados a cumplir.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad es el de garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, mismo que fue infringido por las conductas señaladas.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en una **falta** de resultado que ocasionan un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los demás aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en una misma falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas materia de estudio.

Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ESPECIAL**.³¹

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.³²

³¹ Al respecto, es importante destacar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-623/2021 Y ACUMULADOS, en el cual respecto a la diferencia entre la calificación de la falta de los precandidatos y el partido incoado estableció lo siguiente:

“Ante estas precisiones, cuando un partido no registra un precandidato, pero éste realiza actos de precampaña y ambos omiten presentar el informe correspondiente, el grado de culpabilidad es distinto en la medida en que:

1) El precandidato omitió hacer la acción exigida e incumplió con un deber en su actuar (presentar el informe/omisión simple); y,

2) El partido político no evitó, a través de un deber de vigilancia, esa omisión (comisión por omisión, culpa in vigilando).

En el caso en concreto, esta Sala Superior considera que la calificación de la falta como culpable que le impuso el Consejo General del INE a MORENA y la respectiva reducción de ministraciones, no es incongruente en comparación con la que calificó a la del precandidato y su respectiva sanción, esto es, dolosa y con la pérdida del derecho a ser registrado.”

³² Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor.

Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.

Ahora bien, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo IEEBCS-CG007-ENERO-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, los montos siguientes:

| Partido Político | Financiamiento público actividades ordinarias 2021 |
|------------------|--|
| Morena | \$9,561,670.52 |

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias³³.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

³³ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

En este sentido, es importante mencionar a los partidos políticos que cuentan con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

| ID | PARTIDO POLÍTICO | RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD | MONTO TOTAL DE LA SANCIÓN | MONTOS DE DEDUCCIONES REALIZADAS AL MES DE JUNIO DE 2021 | MONTOS POR SALDAR | TOTAL |
|----|------------------|----------------------------|---------------------------|--|-------------------|----------------|
| 4 | Morena | INE/CG1101/2018 | \$2,804,909.13 | \$2,804,909.13 | \$ - | \$2,804,909.13 |
| | | INE/CG61/2019 | \$324,972.47 | \$324,972.47 | \$ - | \$324,972.47 |
| | | INE/CG470/2019 | \$243,589.11 | \$243,589.11 | \$ - | \$243,589.11 |
| | | INE/CG650/2020 | \$880,832.89 | \$796,805.88 | \$ 84,027.01 | \$880,832.89 |

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local y federal tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con financiamiento local cuenta con la capacidad económica suficiente para poder hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Cabe señalar que, la ejecución de las sanciones que en su caso se impongan **al partido político que recibió financiamiento público estatal**, se realizará por la autoridad electoral local.

C. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como UMA; por lo que, en la presente Resolución en el supuesto que se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto obligado, se aplicará la UMA.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 10/2018 **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN** emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la Jurisprudencia que señala que *de la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.*

Derivado de lo anterior, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el valor de la UMA impuesta como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En este contexto, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la UMA vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a **\$86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 M.N.)**, lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de precampaña correspondiente al Proceso Electoral que nos ocupa.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió presentar los informes de precampaña respectivos.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conducta objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, del presente considerando en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad, y el plazo de revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³⁴

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del artículo en comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al **Partido Morena** debe ser en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir presentar un informe de precampaña**, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por

³⁴ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al **100% (cien por ciento)** respecto del **30% (treinta por ciento)** sobre el tope máximo de gastos de precampaña establecido por la autoridad para los procesos de selección de precandidatos al cargo de Gubernatura, con la finalidad de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California Sur, lo cual asciende a un total de **\$665,798.53 (seiscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos 53/100 M.N.)**.

Derivado de lo anterior, se obtienen las cifras siguientes:

| Nombre | Cargo | Entidad/ Municipio | Tope de Gastos de Precampaña | SANCIÓN 30% sobre el Tope de Gasto de Precampaña | Partido con Financiamiento Público Ordinario 2021 más alto MORENA | Porcentaje de sanción ³⁵ |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| Víctor Manuel Castro Cosío | Gubernatura | Baja California Sur | 2,219,328.44 | \$665,798.53 | \$9,561,670.52 | 100% |
| | | | TOTAL | \$665,798.53 | | |

Asimismo, es preciso referir que el criterio de sanción para el **Partido Morena** se fundamenta en lo aprobado por la Comisión de Fiscalización en su sesión extraordinaria del seis de abril del dos mil quince, en el que definen los criterios de proporcionalidad con los que se sancionara a cada instituto político derivado del financiamiento ordinario que perciben.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido Morena**, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$665,798.53 (seiscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos 53/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

³⁵ Sanción calculada con base en el porcentaje de financiamiento del partido político que más recursos públicos recibió en el estado de San Luis Potosí, por concepto de Actividades Ordinarias Permanentes, en comparación a los montos recibidos por esos mismos conceptos por el partido sancionado.

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Notificación electrónica. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto **aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020**, por el que determinó la **notificación electrónica** de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de aquellos personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Político Morena y el ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío por lo desarrollado en el **Considerando 2.2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se sanciona al ciudadano Víctor Manuel Castro Cosío con una multa equivalente a **415 (cuatrocientas quince) Unidades de Medida y Actualización**, cantidad que asciende a **\$35,972.20 (treinta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.)**, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en los considerandos **2.2 y 2.4** de la presente Resolución.

TERCERO. Se impone al **Partido Político Morena**, una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de **\$665,798.53 (seiscientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos 53/100 M.N.)**, de conformidad con lo señalado en los Considerandos **2.2 y 2.4** de la presente Resolución.

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Político Morena, así como al C. Víctor Manuel Castro Cosío a través del Sistema Integral de Fiscalización, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 7 de la presente Resolución.

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Consejo Estatal Electoral del estado de Baja California Sur, para los efectos siguientes:

- a. Que proceda al cobro de las sanciones impuestas al Partido Morena, las cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/226/2021/BCS

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**